

INTRODUCCIÓN

La actividad minera es tan antigua como el hombre y en nuestro territorio se han hallado vestigios de minería desde tiempos muy remotos, incluso antes de la llegada de los españoles.

La legislación minera ecuatoriana data desde las ordenanzas de Simón Bolívar y constantemente se han dictado leyes y códigos tendientes a conseguir el desarrollo de la misma. En el Registro Oficial No. 517 del 29 de Enero de 2009, se expide la nueva Ley de Minería, cuerpo legal que introduce varias figuras jurídicas para el otorgamiento de concesiones mineras, dejando una clara discrecionalidad a los funcionarios públicos. Desde la vigencia de la Ley de Minería No. 126 en mayo de 1991 se inició un proceso de investigaciones y consensos para lograr introducir reformas, sin embargo el actual Gobierno decidió expedir un nuevo marco legal para el Sector Minero y una nueva estructura de la Administración Minera.

Los altos costos requeridos para el control de las concesiones mineras y las deficiencias de índole administrativo y de gestión gerencial, el elevado nivel de inversiones que representa la exploración minera, requerirá de una sólida liquidez de las entidades del sector público, para que cumplan su rol en lograr un desarrollo eficaz y eficiente de este sector, que permita en un

corto plazo explotar los recursos minerales existentes en el subsuelo de nuestro país.

En virtud de que la actividad minera no ha despegado económicamente en los últimos años, sino que se ha mantenido una minería a pequeña escala, el actual Gobierno en su ánimo de obtener recursos económicos, en la nueva Ley ha incrementado los valores concernientes al pago de patentes de conservación y regalías, para cuyo efecto a la minería la ha dividido en Minería Artesanal, Pequeña Minería y Minería a Gran Escala, figuras jurídicas que pretenden acabar o al menos reducir la especulación en el otorgamiento de concesiones mineras y obviamente garantizar la inversión de riesgo que exige esta sacrificada actividad.

Bajo este contexto, se considera que la elaboración del presente trabajo investigativo justifica la real dimensión de lo que es la minería en el Ecuador y por tanto de mucha importancia para quienes de una u otra manera se encuentran involucrados en esta sacrificada y riesgosa actividad, principalmente para empresarios mineros y estudiantes de las universidades en las ramas de derecho, geología y minería.

El objetivo primordial para la elaboración del presente trabajo sin lugar a dudas, es la obtención del título abogado de los Tribunales de Justicia, además de transmitir a las personas que se encuentran inmersas en el sector minero, las incongruencias y vacíos legales que se presentan en la actual Ley de Minería y sus Reglamentos; y, además proporcionar de una manera comprensible los pasos administrativos encaminados a la obtención de una concesión minera.

El tema que contiene el presente trabajo investigativo como ya se manifestó anteriormente, se refiere a hacer conocer a las personas interesadas e involucradas en el sector minero, los

conceptos fundamentales de la minería, como adquirir una concesión minera, cuales son las obligaciones y derechos de los titulares mineros, los beneficios que pueden conseguirse de esta actividad y los vacíos legales existentes. Así mismo se pretende concientizar a las personas inmersas en la minería, la obligación ética y legal que tienen para la conservación del ambiente, personas entre las cuales no solamente están los mineros, sino también las instituciones del Estado como son los municipios y consejos provinciales que tienen la obligación histórica de realizar un papel preponderante en el desarrollo de la minería y por tanto en la conservación del ambiente. Igualmente se aspira a través de este trabajo investigativo determinar conclusiones y recomendaciones que permitan a los mineros, instituciones públicas inmersas en la minería y a las comunidades involucradas en este sector, aplicar en forma correcta y eficaz, los procedimientos administrativos y judiciales para la obtención y conservación de los derechos mineros.

CAPÍTULO I

ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE LA MINERÍA

1.1 LA MINERÍA Y EL HOMBRE

Las primeras materias terrestres utilizadas por el hombre fueron sustancias no metálicas: pedernal, calcedonia, cuarzo y ciertas rocas, duras o blandas, como la cuarcita, caliza o esteatita, buscadas para ser empleadas como armas o herramientas y utensilios. Innegablemente la arcilla representa la primera sustancia mineral utilizada en gran escala. Se han encontrado en Moravia, figuras de arcilla cocida que se creen pertenecen al periodo Aurinaciense. Asimismo, los ladrillos, tejas y tabletas de arcilla fueron muy utilizados en las culturas orientales para la edificación de sus ciudades y para escribir. Igualmente utilizaba ocre y pinturas minerales.

La minería más antigua corresponde a la de las piedras preciosas y las decorativas: durante

más de 2.000 años los faraones enviaron expediciones con prospectores a la península del Sinaí y al Sudán para buscar turquesas: Ball identifica como primer geólogo al capitán egipcio Haroeris que hacia el año 2.000 A.C. condujo una expedición al Sinaí y tras tres meses de prospección descubrió y extrajo grandes cantidades de turquesas.

Los primeros metales empleados por el hombre fueron probablemente recogidos en los ríos en forma de metales nativos. Se supone que el oro se utilizó antes que el Cobre y se considera que este fue descubierto unos 1.800 años a de JC y que se utilizaba corrientemente en Europa hacia el 4.000 a de JC. Estrabón nos dice que "en el país de los Saones, donde está la Colquida, los torrentes invernales arrastran oro, que los bárbaros recogen en artesas perforadas y forradas con vellones de lana".¹ De ahí la leyenda del vellocino de oro. Estos vellones colgados de los árboles para que se secaran de modo que después se pudiera hacer caer, vareándolos, el oro menudo prendido en ellos, es lo que incitó a Jasón y a los argonautas a salir en la nave "Argos" en busca del vellocino de oro cerca de la costa del Euxino. Esta es la noticia más antigua que se tiene de un placer de oro, y la más antigua expresión poética de una primitiva aventura minera.

Todavía hoy se emplean procedimientos algo parecidos para extraer oro fino en los placeres auríferos de América del Sur.

En los escritos de los filósofos griegos y romanos se encuentra un cierto conocimiento de la manera de yacer los minerales y se empieza a manifestar curiosidad respecto a la génesis de los mismos. Herodoto habla de la presencia de oro en las venas de cuarzo de la comarca de los crisitas (Grecia), descrito posteriormente por Diodoro. Teofrasto, discípulo de Aristóteles describe en su (Libro de las Piedras), la manera de tratar y beneficiar a los minerales, este es el

¹ MAXIMINA NAVARRO, Investigación Histórica de la Minería en el Ecuador, Tomo 1, pág. 33. 1986.

primer libro didáctico sobre mineralogía.

Estrabón, que escribió en el año 19 de nuestra era, hace referencia a la minería aluvial de España y dice: "El oro no solo se extrae de las minas, sino que se recoge de las Arenas acuíferas arrastradas por los ríos y torrentes".² En las minuciosas descripciones técnicas de Plinio se encuentran numerosos pormenores de la presencia de minerales en España.

También nos dice que Aníbal tenía una mina de plata llamada Bebullo en la España meridional, en una montaña donde había abierto una galería de 1.500 pasos. Plinio dice que rendía 300 libras (145 Kg.) de plata diariamente.

Durante los siglos V a XV parece haberse añadido muy poco el conocimiento alcanzado por los filósofos antiguos con la excepción de Avicena, el traductor árabe de Aristóteles que agrupó los minerales en Piedras Minerales Sulfurosos, Metales y Sales, reconociendo de este modo definitivamente, el grupo de los sulfuros.

La primera teoría razonable de la génesis de las menas minerales fue formulada por el sajón Agrícola, quien fue un profundo observador de los minerales y un cuidadoso anotador de sus observaciones. Aunque algunas de sus opiniones eran fantásticas, demostró en su obra "De Re Metallica" algunas teorías que la moderna metalogenia sigue considerando válidas, como el origen hidrotermal de algunos minerales.

² MAXIMINA NAVARRO, Investigación Histórica de la Minería en el Ecuador, Tomo 1, pág. 42. 1986.

A partir ya de esta época se empiezan a aplicar a la minería los conocimientos científicos y en el siglo XVIII comienzan a crearse las primeras Escuelas de Minas de Europa.

Se finaliza esta brevísima historia de la minería, haciendo referencia a España, nación que fue desde antiguo, destino de pueblos conquistadores que efectuaban su comercio con los primitivos pobladores de España y explotaban el metal de sus minas.

Estas minas solo cesaron su explotación durante la ocupación cartaginesa que duró unos trescientos años, y tras la conquista de España por Augusto se reanudó esta minería, hasta que una nueva invasión, la de los bárbaros, paralizó nuevamente dichas explotaciones.

Como se puede apreciar, la minería, a través de la historia ha sido un negocio, ha sido tradición y ha sido en ocasiones hasta afición. Así, es frecuente en nuestros días encontrar la figura del "minero", siempre a la búsqueda con la ilusión por delante, de ese golpe de fortuna que haga cambiar su vida.

1.2 BREVE HISTORIA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR

La minería en el Ecuador se remonta a los trabajos de explotación de sustancias minerales, especialmente el oro, actividades que fueron desarrolladas por nuestros indígenas en los lechos de los ríos y con el método de cielo abierto (canteras). La actividad minera en lo que ahora es nuestro territorio se efectuó principalmente en las regiones de Loja, Zamora Chinchipe y Azuay, provincias que hasta la actualidad guardan su tradición minera.

Por muchos es conocida y por todos aceptado el gran potencial minero asociado con el cinturón andino en Sudamérica; así se tiene en Colombia grandes depósitos de carbón, amplios placeres auríferos tanto en el Chocó, al centro oriente, como en Barbacoas al sur occidente; adicionándose a esto el depósito de esmeraldas de El Muzo.

Perú y Chile mantienen su tradición minera a través de centros de explotación de minerales polimetálicos enriquecidos en cobre, plata plomo, zinc y antimonio como principales, constituyendo amplias provincias metalogénicas distribuidas a lo largo de la cordillera andina.

Únicamente en lo que corresponde al territorio ecuatoriano se tenía un gran vacío en cuanto a tradición minera propiamente dicha, o centro de explotación minera en desarrollo. Sin embargo, resulta bastante difícil concebir que sobre la misma gran estructura, observando condiciones geológicas y tectónicas parecidas, no se tenga también importantes depósitos minerales asociados, mas aún si la tradición e historia ya plantea una simbiosis entre el Tahuantinsuyo, "El Dorado" y las múltiples campañas de los conquistadores españoles en la búsqueda de ingentes tesoros respaldados por algunos centros de explotación asociados con artículos elaborados a base de metales y piedras preciosas o simplemente apoyados en indicios verbales. Para reafirmar lo dicho, con relación al rescate de Atahualpa el historiador Rumazo González señala que los generales del Inca: Quisquis, Calicuchima y Rumiñahui lograron reunir un millón trescientos veinte y seis mil quinientos treinta y nueve pesos de buen oro y cincuenta y un mil seiscientos diez marcos de plata, procedentes de yacimientos existentes dentro del territorio inca que, por otra parte, y de acuerdo a la información conocida, provenía del Perú septentrional.

La historia de la minería en el Ecuador es muy extensa y así tenemos que se remonta y comienzan a aparecer nombres tales como: Sevilla de Oro y Macas, Logroño de los Caballeros

y Valladolid, Zamora y Nambija, Portovelo y Loja, todos ellos relacionados con la producción de oro primario; Camumbi, Palabi, Cachabi, Santiago, Cayapas, Due, Candue, Aguarico, Napo, Jatunyacu y Anzu, como los principales ríos con los cuales se hallan asociados importantes placeres auríferos: Condorasto, Macuchi y Angamarca, para polimetálicos-plata y, Azogues con la producción de mercurio.

1.2 MINERÍA INCAICA

La minería incaica estuvo circunscrita al oro, la plata, el platino y piedras preciosas, destinadas a adornar templos, casas y personas, y en otros casos el oro era utilizado para la elaboración de anzuelos para la pesca.

El oro lo extraían principalmente de las márgenes de los ríos, placeres y aluviones; el producto de la explotación de estos minerales pertenecía al Inca que hacía de Jefe de la Comarca y para cuyo trabajo contaba con sus súbditos, dedicados en forma exclusiva a estas tareas en forma gratuita y obligatoria. El oro que se acumulaba pasaba a ser patrimonio exclusivo del rey, quien lo negociaba con otros jefes de tribu en el intercambio de productos para incrementar sus riquezas.

Es necesario destacar que en la época incaica, se fundía y se trabajaba el platino, hecho que según los historiadores no sucedió en otras partes del mundo.

1.3 MINERÍA EN LA COLONIA

Según los reportes que nos proporciona la historia, tenemos que en la época de la colonia, prácticamente no hubo trabajos de mayor significación dentro del campo minero, con excepción de los lavadores de oro y excavaciones muy superficiales de algunos afloramientos, como por ejemplo en Portovelo, Fierro Urco, Sigsig, Santa Isabel y en la zona de lo que hoy es Nambija.

El trabajo de las minas se lo hacía con el concurso de los indios, a quienes se les obligaba a trabajar por el sistema de las mitas, que significó uno de los mayores abusos e injusticias que se practicaron en esta época. Este período se caracterizó principalmente por cuanto todo el oro que explotaban nuestros indígenas, pertenecía en forma exclusiva a la Corona Real.

En el año de 1783, se expidieron las primeras ordenanzas reales que otorgaban las concesiones mineras que permitían la explotación de oro a los indios, quienes en forma obligatoria debían pagar "El quinto Real" que constituía un impuesto del 20% de la producción obtenida.

1.4 MINERÍA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA

El 14 de diciembre de 1828 el Libertador Simón Bolívar, dictó su primer Decreto, confiriendo exención de toda clase de servicio militar a los directores sobrestantes mineros y al resto de personal que laboraba en las minas, concediéndoles además matrículas respectivas. Este decreto estuvo orientado exclusivamente a evitar la deserción de los trabajadores mineros y

consecuentemente el abandono de las minas por falta de personal.

El 24 de Octubre de 1829, Simón Bolívar, expidió el Reglamento a través del cual se determinaba la propiedad del Estado respecto de los yacimientos mineros, como deben ser otorgadas las minas, y se determinó el impuesto para el establecimiento de una cátedra sobre minería y mecánica, misma que debía impartirse en cada provincia considerada como minera, cuya responsabilidad se la delegó a los señores gobernadores.

El 25 de Mayo de 1830 el Congreso Constituyente del Estado del Ecuador en la República de Colombia, expidió la Ley “Promoviendo el Fomento de Minas”; este cuerpo legal se promulgó con el ánimo de reparar los desastres que ha sufrido la patria, tanto es así que el considerando principal de la ley se refiere a la necesidad de reanimar a estos pueblos de la mortal decadencia en la que se hallan sus industrias, agricultura y comercio; y, que las minas de este suelo deben ser la principal fuente de las riquezas.

El 13 de Abril de 1837, el Senado y la Cámara de Representantes de la República del Ecuador, reunidos en Congreso, autorizan al Poder Ejecutivo dictar una Ordenanza de Minería, teniendo como base para ello el contenido de la expedida por la Nueva España dictada en mayo de 1.783, estableciéndose para tal efecto un Juzgado de Minas con sede en el pueblo de Azogues.

El 1 de noviembre de 1.847, se expide la Ley sobre Explotación de Minerales, por parte del Senado y la Cámara de Representes, ya que las anteriores leyes y decretos no ha sido suficientes para estimular la explotación de las minas.

El 29 de agosto de 1.883 se expide un Decreto, mediante el cual se exime el derecho de las alcabalas y registros, respecto de la venta de las minas o traspaso de acciones.

El 1 de enero de 1.887, se promulga y entra en vigencia en la República del Ecuador, el Código de Minería, que contenía 19 Títulos con 212 artículos.

Con sujeción a lo que establecía el Código de Minería, el 4 de febrero de ese mismo año, el Presidente de la República expide un Decreto mediante el cual libera de impuestos a las maquinarias, herramientas, equipos y otros implementos necesarios para las actividades mineras. En este mismo mes se expidieron reformas al citado Código con el objeto de eliminar ciertas trabas burocráticas y propender eficazmente al desarrollo de la industria minera.

El 23 de agosto de 1.892 se expide la segunda Ley Reformatoria del Código de Minería, a través de la cual se otorgan más incentivos a las personas dedicadas a la minería.

El 20 de octubre de 1.900 se promulgó una tercera Ley Reformatoria al Código de Minería, en el sentido de que el Poder Ejecutivo tenía la facultad de arrendar las minas hasta por un período de 50 años. Esta disposición fue derogada el 3 de octubre de 1.901.

El 24 de septiembre de 1.909 con el propósito de incrementar la explotación minera, se reforma por cuarta vez el Código de Minería, reformas entre las que constaba la libre adquisición de las minas, reservándose el Estado la explotación del petróleo, carbón, hierro, principalmente, y se le otorgo al Poder Ejecutivo la facultad de arrendar las minas hasta 50

años mediante subasta pública.

El 14 de octubre de 1.914 se reforma por quinta vez el Código de Minería.

El 28 de octubre de 1.919 se expide la sexta reforma al citado cuerpo legal, misma que clarifica y determina con precisión, donde, cómo y cuándo deben pagarse las patentes mineras.

El 14 de febrero de 1.936 se expide un Decreto mediante el cual se fijan los procedimientos para las inspecciones de las minas, a efecto de determinar la ubicación geográfica exacta de las mismas.

El 18 de marzo de 1.936 se expidieron nuevas reformas al Código de Minería, a través de las cuales, por primera vez, se obligaba a las empresas mineras al pago del impuesto a la renta; y, el 18 de agosto del mismo año se promulgó el Reglamento de Minería.

El 5 de febrero de 1973 se expidió la Ley General de Minería, publicada en el Registro Oficial de 23 de marzo del mismo año, así como el Reglamento General de Aplicación, cuerpos legales que en el transcurso del tiempo sufrieron muchas reformas de carácter técnico y jurídico, hasta que con Decreto No 101 de 24 de enero de 1974, publicado en el Registro Oficial No 484 de 31 de enero, se promulgó la Ley de Fomento Minero.

Luego de haber transcurrido más de once años de vigencia de esta Ley, mediante Decreto Ley No 006 de 21 de agosto de 1985, publicado en el Registro Oficial No 255 de 22 de agosto del mismo año, se promulgó la Ley de Minería, que básicamente creó las figuras contractuales para otorgar las concesiones mineras.

El 31 de mayo de 1991 en el Registro Oficial No 695, se promulgó la Ley de Minería No 126.

Por último dentro de esta breve historia, se debe manifestar que en el Suplemento de Registro Oficial No 517 de 29 de enero de 2009, en el gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, se promulgó la Ley de Minería, en actual vigencia y que es materia del presente trabajo investigativo.

CAPÍTULO II

DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

2.1 EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN

El gobierno presidido por el Doctor Rodrigo Borja Cevallos, consciente de que la minería en el Ecuador puede convertirse en un renglón importante en la economía del Ecuador, remitió al Congreso Nacional el nuevo proyecto de Ley de Minería, mismo que luego de ser discutido en dos debates por el Congreso Nacional fue aprobado; y es así que la Ley de Minería No 126, se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

Con el transcurso de los años y con el posicionamiento del gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, se decide crear una nueva Ley de Minería que regule de una manera más eficiente el cuidado ambiental y el pago económico al Estado por los beneficios adquiridos, producto de la explotación de los recursos no renovables, es así que en el Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009, se promulga la nueva Ley de Minería.

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta regulación contiene el campo en el cual se va a desarrollar la actividad minera y el modo en que se han de regular las relaciones que puedan surgir entre el Estado y los sujetos de derechos mineros, de esta manera tenemos:

L.M. (1991) No. 126. Art. 1.- Ámbito de aplicación. La presente Ley de Minería norma las relaciones del Estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras y las de estas entre sí, respecto de la obtención de derechos y de la ejecución de actividades mineras. Se exceptúan de las disposiciones de esta Ley el petróleo y demás hidrocarburos, los minerales radioactivos y las aguas minero - medicinales.³

L.M. Actual. Art. 2.- Ámbito de aplicación.- A fin de normar la delegación prevista en el artículo anterior, la presente Ley de Minería, regula las relaciones del Estado con las empresas mixtas mineras; con las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas, mixtas, privadas y las de éstas entre sí, respecto de la obtención, conservación y extinción de derechos mineros y de la ejecución de actividades mineras.⁴

Dentro del ámbito de aplicación se sigue manteniendo el mismo marco jurídico en cuanto a la regulación de los derechos y actividades mineras, aunque se puede apreciar que dentro de la nueva ley se incorpora la regulación de las empresas mixtas mineras, esto dado por el hecho que en la ley vigente se crea la Empresa Nacional Minera y como se analizará en lo posterior, una de sus facultades es el asociarse y constituir compañías de Economía Mixta.

³ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

⁴ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

2.2.1 Jurisdicción y competencia

La jurisdicción es la facultad que tienen los órganos competentes en materia minera de juzgar y ejecutar lo juzgado, mientras que la competencia es la medida en la cual esa potestad es distribuida; así los dos cuerpos legales objeto de este análisis prescriben:

L.M. (1991) No. 126. Art. 3.- Jurisdicción y competencia. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades mineras, están sometidas a las leyes, jueces y tribunales del país. En el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras, se tiene como implícita su renuncia a toda reclamación por vía diplomática o de organismos internacionales de Justicia.⁵

L.M. Actual. Art. 14.- Jurisdicción y competencia.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de derechos mineros o realicen actividades mineras, están sometidas a las leyes, tribunales y jueces del país. En el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras, se atenderán a los términos del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador.⁶

Se puede observar que en cuanto a la jurisdicción y competencia la norma no ha cambiado, ya que lo único que se hace en la nueva ley es el someterse a lo estipulado en el Art. 422 de la Constitución de la República, mismo que manifiesta que no se puede celebrar contratos en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a instancias internacionales, por lo que se entendería implícito la renuncia de reclamación por vía diplomática por parte de las personas naturales o jurídicas extranjeras que celebren contratos mineros con el Estado.

⁵ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

⁶ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

Es así que se puede encontrar que tanto la anterior ley de minería como la actual en el Art. 4 y en el Art. 15 respectivamente, declaran de utilidad pública la actividad minera en todas sus fases, dentro como fuera de las concesiones mineras. En consecuencia procede la constitución de servidumbres que fueren necesarias para ejercer todos los derechos mineros.

De este modo lo que se pretende es que no existan impedimentos jurídicos para que los concesionarios mineros puedan ejecutar sus actividades en tierras que pertenecen a particulares o se hallen sometidas a la competencia de otras instituciones del Estado.

2.3 NORMAS SUPLETORIAS

Son normas mediante las cuales la Ley de Minería se coadyuva para cubrir vacíos jurídicos o realizar procedimientos generales establecidos para cada caso que esta ley no regula. A continuación se transcribe lo prescrito en ambas leyes.

L.M. (1991) No. 126. Art. 2.- Normas supletorias. Son aplicables en materia minera las normas del Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías y demás disposiciones de la legislación positiva, en todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado por la presente Ley.⁷

L.M. Actual. Art. 3.- Normas supletorias.- Son aplicables en materia minera, en la relación Estado - particulares, y de éstos entre sí, la normativa: Administrativa, Contencioso-Administrativa; de soberanía alimentaria; tributaria; penal; procesal penal; de empresas públicas; societaria; civil; procesal civil; de gobiernos autónomos

⁷ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

descentralizados; de patrimonio cultural y más normativa de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, en todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la presente ley.⁸

Se desprende que dentro las normas supletorias para la actual Ley de Minería, se incorporan nuevas Leyes como la de Soberanía Alimentaria, de Empresas Públicas, de Patrimonio Cultural; esto como consecuencia de que en el Gobierno del Presidente Economista Rafael Correa Delgado, se dio paso a la creación de nuevas leyes, con el fin de centralizar el poder y ejercer un control mucho más estricto en las diferentes actividades, además de concentrar en el gobierno central los beneficios que provengan de la explotación de todos los recursos naturales.

2.4 DEL DOMINIO DEL ESTADO

De acuerdo con la Carta Magna, el Código Civil y la Ley de Minería pertenecen al dominio del Estado todos los recursos naturales no renovables, las sustancias minerales existentes en el territorio nacional, cualesquiera sea su origen, forma y estado físico, hállese en el interior o en la superficie de la tierra. Pero hay que recalcar que en la ley vigente, se agregan las palabras imprescriptible e irrenunciable, de lo cual se desprende que el Estado bajo ningún concepto puede perder el dominio de estos recursos, salvo que conceda la concesión minera a favor de determinada persona, sin embargo de lo cual en el lapso aproximado de 25 años los recursos de los que hablamos, regresarían a poder del Estado, esto acorde lo estipulado en el Art. 36 de la actual Ley.

⁸ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

Además la nueva ley prevé que la exploración y la explotación de los recursos mineros se fomentará mediante la participación y veeduría ciudadana.

2.5 DERECHOS MINEROS

Mediante esta regulación se protege a los concesionarios mineros y se asegura un desarrollo normal de la actividad minera que estos realizan, es así que la Ley de Minería No. 126. prescribe:

Art. 6.- Derechos mineros. Por derechos mineros se entienden aquéllos que emanan tanto de las concesiones de exploración y explotación, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación y de las licencias de comercialización.⁹

Y la Ley de Minería Actual determina:

Art. 17.- Derechos mineros.- Por derechos mineros se entienden aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de comercialización.¹⁰

Resulta necesario hacer énfasis en lo referente al derecho preferente que reconocía la Ley 126,

⁹ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

¹⁰ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

ya que este era un derecho minero reconocido al momento de la presentación de solicitudes de concesiones mineras, mismo que servía al momento del otorgamiento del título minero.

2.6 DE LA ACTIVIDAD MINERA NACIONAL

Dentro de esta regulación se vuelve indispensable el hacer la transcripción de los artículos para poder hacer el respectivo análisis, así tenemos:

L.M. (1991) No. 126. Art. 16.- Actividad Minera Nacional. La actividad minera nacional se desarrolla por medio de la gestión estatal, mixta, comunitaria o de autogestión y privada.

El Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico - Minero Metalúrgica, la que podrá constituir compañías de economía mixta.

Las actividades comunitarias o de autogestión y la privada gozan de las garantías que les corresponde y merecen la protección estatal, en la forma establecida en esta Ley.¹¹

L.M. Actual. Art. 21.- Actividad minera nacional.- La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales, de conformidad con esta ley. El Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, gozan de las mismas garantías que les corresponde y merecen la protección estatal, en la forma establecida en la Constitución y en esta ley.¹²

¹¹ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

¹² Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

En lo referente a la actividad minera, se puede dilucidar que el cambio sustancial es el organismo estatal a través del cual el Gobierno Central va a ejecutar las actividades mineras. En la Ley 126, el Estado realiza sus actividades mineras por intermedio de la Dirección Nacional de Geología, institución que reemplazó a la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero- Metalúrgica, que fue extinguida en 1999 por el gobierno del Doctor Jamil Mahuad, mientras que en la actual ley se efectúa las actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional Minera.

Una de sus similitudes es que ambos organismos pueden constituir compañías de economía mixta; a pesar de esta facultad que se le otorgaba a la Dirección Nacional de Geología, fue tan escaso este modo de asociación que se podría hablar de una no participación por parte del Estado en la actividad minera, a diferencia de hoy que se da una prioridad al gobierno en la participación minera.

2.7 FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA

Para efectos de la aplicación de la Ley de Minería, el artículo 18 y 27 de la Ley 126 y la Nueva Ley de Minería respectivamente, determina que la actividad minera se clasifica en varias fases que permiten que no solamente los técnicos en minería determinen con precisión en qué consisten, sino que el común de los mineros hablen y sepan en qué fase de la actividad se encuentran, de esta manera las conceptualizaciones de estas son:

2.7.1 Prospección

Que consiste en la búsqueda de indicios de nuevas áreas mineralizadas.

2.7.2 Exploración

Que consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. En este punto es necesario señalar que la actual ley la ha dividido en dos etapas, a saber: Exploración Inicial y Avanzada, para acogerse a la segunda etapa debe haber una renuncia a una parte de la concesión otorgada inicialmente. La exploración incluye también la evaluación económica del yacimiento.

2.7.3 Explotación

Que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales.

2.7.4 Beneficio

Que consiste en el tratamiento de los minerales explotados para elevar el contenido útil o la ley de los mismos.

2.7.5 Fundición

Que comprende los procedimientos técnicos destinados a separar los metales de los correspondientes minerales o concentrados producidos en el beneficio.

2.7.6 Comercialización

Que consiste en la compraventa de minerales o la celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de la actividad minera.

2.7.7 Cierre de Minas

Que consiste en el término de las actividades mineras y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de interés público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente.

Se puede evidenciar que dentro de las fases de la actividad minera se incorpora el cierre de minas, ya que antes los titulares de las concesiones una vez que culminaban sus actividades, sea cualesquiera de las fases antes descritas, se marchaban sin realizar el desmantelamiento de las instalaciones y menos aún una reparación ambiental por la afección que causa el realizar

actividades mineras, dejando consecuentemente pasivos ambientales que nadie se encargaba de remediarlos. Hoy la Ley de Minería prevé en forma categórica el cumplimiento de esta obligación, situación que sin lugar a dudas beneficia a las comunidades aledañas a los proyectos mineros; teniendo en cuenta que los concesionarios mineros tienen la obligación de cumplir con el deber reparatorio, y más aún cuando la Carta Magna del Estado lo prescribe en su Art. 397. Por eso se considera muy acertada la incorporación de esta fase, ya que de este modo se obliga a realizar una restauración ambiental, además que sirve como una fase de control para corroborar o desvirtuar una afección ambiental.

2.8 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA MINERA

En cuanto a la política minera tanto en la Ley 126, como en la actual Ley de Minería, se establece que la dirección de esta es atribución de la función ejecutiva, es decir del Presidente de la República.

Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y aplicación, la Ley 126 sostenía que la ejecutaría a través del Ministerio de Energía y Minas y las entidades y organismos que se detalla a continuación.

- Subsecretaría de Minas.- Unidad de nivel ejecutivo del Ministerio de Energía y Minas, dependiente del Despacho del Ministro, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. Responsable de propiciar el desarrollo sustentable del sector geológico minero, promoviendo la inversión nacional y extranjera.

- Dirección Nacional de Minería.- Dependencia del Ministerio de Energía y Minas, directamente encargada de administrar los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros, de conformidad con las regulaciones de la Ley de Minería No. 126, y para el cabal cumplimiento de sus funciones cuenta con varias Direcciones Regionales de Minería.
- Direcciones Regionales de Minería.- Eran encargadas de otorgar concesiones de exploración, explotación, licencias de comercialización, autorizaciones para plantas de beneficio, fundición, refinación, declarar nulidades y caducidades, y, de conocer y fallar en primera instancia los procesos de oposición.

Toda esta estructura organizacional, es suprimida por la nueva Ley de Minería, y a vez se crean las siguientes instituciones:

- Ministerio Sectorial.- Es el órgano rector y planificador del sector minero, es decir es el encargado de impartir las políticas, directrices y planes aplicables para el desarrollo del sector minero, esto acorde a los principios contenidos en la Constitución de la República, tales como del buen vivir, ambientales, sociales, culturales y necesidades económicas.

Dentro de las atribuciones que posee esta institución, contenidas en el Art. 7 de dicha ley, existen dos de vital importancia; una es la de crear los Consejos Consultivos, que va encaminada a la participación ciudadana en cuanto se refiere a la toma de decisiones en las políticas mineras; y, la de otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros.

- Agencia de Regulación y Control Minero.- Entidad técnica-administrativa adscrita al Ministerio Sectorial, encargada de la vigilancia, auditoria, intervención y control de las fases de la actividad minera. Las más importantes atribuciones que ostenta esta institución son:

c) Emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras, de autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción de contratos de explotación, por parte del Ministerio Sectorial;

d) Llevar un registro y catastro de las concesiones mineras y publicarlo mediante medios informáticos y electrónicos;

e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto de las resoluciones de las unidades desconcentradas que llegaren a su conocimiento;

f) Conocer, tramitar y resolver, en los procesos de amparo administrativo;

g) Inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares de los derechos y títulos mineros;

k) Fijar los derechos de concesión en el sector minero de conformidad con lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así como recaudar los montos correspondientes por multas y sanciones;

l) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector;

m) Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la imposición de las sanciones establecidas en esta ley;

o) Otorgar las licencias de comercialización de sustancias minerales determinadas en la presente ley.

Se podría decir que esta entidad suple a la Dirección Nacional de Minería, puesto que se sigue manejando como el ente máximo de juzgamiento en caso de apelaciones y recursos, así como en los procesos de amparos administrativos.

Además se debe tomar en cuenta que la Agencia de Regulación y Control Minero a través de su estatuto es quien determina las competencias de las Agencias Regionales, mismas que se crearán acorde la necesidad de regulación de la actividad minera.

- Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico.- Institución

adscrita al Ministerio Sectorial, que se encarga de realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera y Metalúrgica. Esto con el gran fin y propósito de promover el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos minerales.

- Empresa Nacional Minera.- Esta es la institución que a partir de la nueva Ley de Minería va a tener la mayor participación dentro de la actividad minera, esto dado porque el gobierno central ejecuta dichas actividades a través de este ente, además que el estado tiene la prioridad en cuanto al aprovechamiento sustentable de los recursos materia de la presente ley.

Cabe mencionar que esta empresa al ser parte del sector público, se rige bajo la Ley de Empresas Publicas, misma que puede celebrar cualquier acto o contrato permitido por la ley con el fin de cumplir con su objeto social que es la explotación de los recursos minerales.

CAPÍTULO III

DE LA CONCESIÓN MINERA

3.1 DEFINICIÓN

Según lo prescrito en el Art. 7 de la Ley de Minería No. 126 se definía de la siguiente manera:

Concesiones mineras.- La concesión minera es un derecho real e inmueble, distinto e independiente al de la propiedad de la tierra en que se encuentra aunque ambas pertenezcan a una misma persona. El derecho real que emana de la concesión minera es oponible a terceros, transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y, en general, de todo acto o contrato, excepto el de constitución de patrimonio familiar. Se consideran inmuebles accesorios a la concesión las construcciones, instalaciones y demás objetos afectados permanentemente a su operación. La concesión minera es susceptible de división material o acumulación.¹³

¹³ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la actual Ley de Minería el concepto es el siguiente:

Concesiones mineras.- El Estado podrá excepcionalmente delegar la participación en el sector minero a través de las concesiones. La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados en la presente ley y su reglamento general.¹⁴

Ambos cuerpos legales sostienen que la Concesión Minera es un “Acto Administrativo”¹⁵, mismo que otorga un derecho y se lo materializa a través del título minero.

Otro punto importante que hay que resaltar es el cambio diametral que ha tenido el concepto de la concesión en las dos leyes, esto es, el Art. 7 de la Ley de Minería No. 126 determinaba que la concesión minera es un derecho real e inmueble, distinto e independiente a la de la propiedad de la tierra; en cambio la ley vigente expresa que la concesión simplemente otorga un derecho personal.

La Ley de Minería No. 126 determinaba que el derecho real que emanaba de la concesión minera era oponible a terceros, transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y en general de todo acto o contrato, excepto el de constitución de patrimonio familiar, actos jurídicos que se los podía ejecutar e instrumentar sin necesidad de solicitar autorización de ninguna clase a

¹⁴ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

¹⁵ ERJAFE. Art. 65.- ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.

la Administración Minera. Por su parte la actual ley determina que el derecho personal que emana del título minero es transferible después de haber transcurrido 2 años del otorgamiento del título minero al concesionario y previa calificación obligatoria de la idoneidad del concesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial.

Como se ha determinado en líneas anteriores el derecho emanado de los títulos mineros ha variado, ya que con la actual Ley de Minería el Estado ha centralizado el control total de estos derechos, y para hacer la transferencia de derechos mineros ahora se requiere de la autorización del Estado a través del Ministerio Sectorial, lo que significa una serie de trámites burocráticos que sin lugar a dudas frenará la inversión tanto nacional como extranjera, esto en virtud de que en muchos de los casos los informes estarán sujetos a la discrecionalidad del funcionario público de turno.

Posteriormente se puede evidenciar que la nueva Ley incorpora un requisito para la transferencia del título minero, el cual es, que debe transcurrir dos años después del otorgamiento del título minero al concesionario; a la vez que para poderse perfeccionar la transferencia, el cesionario debe ser calificado como apto por el Ministerio Sectorial.

Un cambio sustancial introducido en la nueva Ley de Minera es el establecido en el inciso final del Art. 30, que expresa:

El domicilio tributario y societario de los titulares de derechos mineros será la región donde se encuentre la concesión minera, la mayor superficie de la suma de ellas en el caso de concesionarios con títulos mineros en distintas provincias o el principal proyecto de explotación o industrialización. Esta obligación deberá acreditarse al momento de solicitar el otorgamiento de una concesión minera y no podrá modificarse

sin una autorización expresa de la Agencia de Regulación y Control Minero.¹⁶

De esta disposición se desprende el deseo del Estado de generar un desarrollo social en las poblaciones donde se encuentren los proyectos mineros, ya que el traslado de estas compañías a donde se encuentran las concesiones va a generar plazas de trabajo además de cooperar al desarrollo de las poblaciones; sin embargo de lo cual se deja abierta la posibilidad de por medio de una autorización de la Agencia de Regulación y Control Minero se pueda establecer el domicilio de la compañía donde más le convenga a esta.

En la nueva Ley de Minería se evidencia que al título minero que emana de la concesión, se le da el carácter de título valor de acuerdo a las regulaciones que para el efecto dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos, esta conceptualización no estaba contemplada en la Ley No. 126. Estimo que este tema crea incertidumbre entre los concesionarios mineros ya que no se sabe a ciencia cierta cuáles serán las regulaciones que para el efecto emitan los organismos antes referidos.

El último inciso del Art. 16 sostiene:

Tanto la explotación directa cuanto las subastas destinadas a concesiones mineras, se realizarán únicamente en las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en su componente de Ordenamiento Territorial.¹⁷

Lo que quiere decir que no se puede solicitar concesiones mineras metálicas, sino que se estará

¹⁶ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

¹⁷ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo emitido por SENPLADES, mismo que contendrá las aéreas a ser subastadas y adjudicadas al mejor oferente.

Adicionalmente es necesario el saber que la unidad de medida para la Concesión Minera es “la hectárea minera”. Esta unidad de medida constituye un volumen de forma piramidal, cuyo vértice es el centro de la tierra, su límite exterior es la superficie del suelo y corresponde planimétricamente a un cuadrado de 100 metros por lado, medido y orientado de acuerdo con el sistema de cuadrícula de la Proyección Transversa Mercator, en uso para la Carta Topográfica Nacional.

Conceptualización que coincide en las leyes materia de este análisis.

Dentro del presente análisis, se puede observar que la Ley anterior como la actual, sostienen que la concesión minera no podrá exceder de 5.000 hectáreas mineras, pero mantienen la diferencia que anteriormente la concesión minera se la otorgaba por un plazo de hasta 30 años renovables automáticamente con la simple presentación de la solicitud, mientras que la ley vigente determina que la concesión no podrá tener un plazo superior a los 25 años y que para su renovación se requiere la autorización previa de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Otro punto de relevancia relacionada a la concesión minera, es el referente a que en la Ley No. 126 no estaba permitida la división material de la concesión, situación que ha variado ya que en la actual ley si se contempla esta posibilidad. En los dos cuerpos legales se contempla la posibilidad la acumulación de hectáreas mineras que no excedan de las 5.000 hectáreas mineras.

En la Ley No. 126., la Concesión Minera se la otorgaba como un título único, esto quiere decir que se otorgaba para realizar todas las fases de la actividad minera, mientras que en la actual el título minero únicamente concede el derecho para hacer la fase de exploración, y para la explotación se requiere de la suscripción del contrato minero correspondiente, figura inexistente en la legislación anterior.

Una vez definida la Concesión Minera y analizados los cambios y falencias, se analizará la forma en que una persona natural o jurídica puede ejecutar actividades mineras, de conformidad con el marco legal que es materia del presente trabajo investigativo.

3.2 DE LOS DERECHOS DE TITULARES MINEROS

Tanto en la Ley 126 como en la actual Ley de Minería, el título minero que otorga el Estado Ecuatoriano lleva implícito el reconocimiento de varios derechos que van encaminados a proteger la titularidad, la inversión dentro de esta actividad y la protección contra perturbaciones de cualquier índole, y así se puede de una manera general señalar los siguientes:

- Ninguna autoridad puede ordenar la suspensión de trabajos mineros amparados por un título, salvo en caso de internación previsto en el artículo (94 y 95 L.M. No.126) y (62 de la Actual Ley de Minería), o cuando así lo exijan la protección de la salud y vida de los trabajadores mineros, cuando así lo requiera la Defensa Civil o cuando se verifique el incumplimiento de la Licencia Ambiental; esta última fue incorporada en la ley vigente.

- Los titulares de concesiones mineras pueden construir e instalar dentro de su concesión: edificios, campamentos, depósitos, ductos, plantas de bombeo y fuerza motriz, cañerías, talleres, líneas de transmisión de energía eléctrica, estanques, sistemas de comunicación, caminos, líneas férreas y demás sistemas de transporte, local y otras instalaciones.
- La ejecución de actividades mineras en general y la autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición y refinación, llevan implícito el correspondiente derecho de aprovechamiento de aguas y el derecho a beneficiarse de las servidumbres que fueren necesarias. Con autorización de la Secretaría Nacional del Agua, los concesionarios mineros puede modificar el curso de las aguas, siempre que no causen perjuicios a terceros.

3.3 DEL AMPARO ADMINISTRATIVO Y ACTOS CAUTELARES

Los dos cuerpos legales objeto de este estudio sostienen que el Amparo Administrativo y Actos Cautelares tienen como objeto principal que se impida el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de hecho o cualquier acto perturbatorio, tanto es así que ambas leyes manifiestan:

El Estado, otorgará amparo administrativo a los titulares de derechos mineros ante denuncias de internación, despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida el ejercicio de sus actividades mineras.¹⁸

¹⁸ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

Un cambio sustancial que se puede dilucidar dentro del Amparo Administrativo es la entidad que lo otorga. En la Ley No. 126 el encargado de hacerlo era la Dirección Nacional de Minería, mientras que en la nueva Ley de Minería esa potestad la tiene la Agencia de Regulación y Control Minero.

Otro cambio importante es que antes el amparo procedía contra perturbaciones de autoridades que actúen sin jurisdicción ni competencia, mientras que en la ley vigente no consta este derecho.

3.4 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS

Dentro de las obligaciones de los titulares mineros se puede observar que se siguen manteniendo las mismas pero con mayor rigurosidad; dentro de las principales tenemos:

3.5 OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones de orden laboral contraídas por los titulares de derechos mineros con sus trabajadores serán de su exclusiva responsabilidad, y de ninguna manera se harán extensivas al Estado Ecuatoriano. (Art. 65 de la Ley No. 126 y Art. 67 de la Actual Ley)

El mayor cambio que contiene esta disposición es el reparto de utilidades. La ley vigente

sostiene que:

En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud; y para el caso de los trabajadores de la pequeña minería será del 10% del porcentaje de utilidades y el 5% restante será pagado al Estado.¹⁹

Lo que se pretende con esto es dar una mayor participación al trabajador dentro de las ganancias que obtenga el titular de la concesión minera, con lo cual se estaría frenando la explotación laboral.

Otra obligación laboral de los concesionarios es emplear personal ecuatoriano en una proporción no menor del 80% para el desarrollo de sus operaciones; mantener programas de entrenamiento y capacitación para su personal, a todo nivel; acoger en sus operaciones a estudiantes de educación superior que realicen prácticas en el campo de la minería y disciplinas afines, proporcionándoles las facilidades que fueren necesarias. Dentro de esta disposición la nueva Ley de Minería pone como un requisito para realizar las prácticas y pasantías en el campo de la minería el ser estudiante de segundo y tercer nivel.

En la parte concerniente a las obligaciones de los titulares mineros, la nueva Ley de Minería incorpora una prohibición al trabajo infantil, la cual manifiesta:

¹⁹ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

Art. 69.- Prohibición de trabajo infantil.- Se prohíbe el trabajo de niños, niñas o adolescentes a cualquier título en toda actividad minera, de conformidad a lo que estipula el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República. La inobservancia a esta disposición será considerada infracción grave y se sancionará por primera y única vez con multa señalada en el reglamento de esta ley; y, en caso de reincidencia, el Ministerio Sectorial declarará la caducidad de la concesión, la terminación del contrato o de los permisos artesanales.²⁰

De esta prohibición surge una causal para la caducidad de la concesión minera o terminación del contrato de explotación.

A más de las obligaciones de tipo laboral señaladas anteriormente, existen obligaciones que no varían entre ambos cuerpos legales, por ejemplo: Resarcimiento de daños y perjuicios, Conservación de hitos demarcatorios, Mantenimiento y Acceso a registros, Inspección de instalaciones, Seguridad e Higiene minero-industrial.

3.6 OTRAS OBLIGACIONES

Las obligaciones más importantes que fueron incorporadas en la nueva Ley de Minería, es la constante en el inciso cuarto del Art. 37 de Ley Vigente:

.....Una vez cumplido el período de exploración inicial o el período de exploración avanzada, según sea el caso, el concesionario minero tendrá un período de hasta dos años para realizar la evaluación económica del yacimiento y solicitar, antes de su vencimiento, el inicio a la etapa de explotación y la correspondiente suscripción del

²⁰ Ibídem

Contrato de Explotación Minera.²¹

Esta obligación viene a suplir lo que con la anterior ley se denominaba el “Manifiesto de Inicio de la Producción”.

Otra obligación es la presentación del Informe de Actividades e Inversiones dentro de la etapa de Exploración. Estos informes se los debe presentar anualmente hasta el 31 de marzo de cada año durante toda la vigencia de la etapa de exploración y deben ser auditados por un profesional certificado por la Agencia de Regulación y Control Minero; esta obligación se encuentra contenida en el Art. 38 de la actual Ley de Minería.

Una vez iniciada la explotación ambos cuerpos legales sostienen la obligación de presentar Informes de Producción, pero con la variación que antes estos informes se los presentaba de forma anual, mientras que la nueva ley dispone que dichos informes deben ser presentados de forma semestral. Adicionalmente se debe resaltar que con la anterior ley, las auditorías las realizaban personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se encuentren calificados como consultores, en cambio la actual ley dispone que estas auditorías serán realizadas por Universidades o Escuelas Politécnicas que cuenten con Facultades o Escuelas en Geología, Minas, Ciencias de la Tierra y/o Ambientales dotadas de suficiente capacidad técnica para realizar el informe, evaluación o comprobación; o profesionales y/o firmas certificados por la Agencia de Regulación y Control Minero.

Adicionalmente el Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería No. 126., manifestaba que un requisito para la obtención del título minero era el

²¹ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

cumplir con los “términos de referencia”, es decir, en la solicitud anexar la declaración expresa de asumir la obligación de presentar los Estudios de Impacto Ambiental, con lo cual era suficiente para que se otorgue el título minero, quedando obligado en lo posterior a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental; en cambio la nueva Ley de Minería en su Art. 78 sostiene:

Los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental.²²

Es decir este cuerpo legal pone como un requisito sine qua non para el otorgamiento del título minero la obtención de la Licencia Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente, misma que se deriva de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

3.7 SERVIDUMBRES

Los dos cuerpos legales objeto de este análisis, sostienen los mismos conceptos y figuras jurídicas que se desprenden de este derecho real.

²² Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

El artículo 4 de la Ley 126 y el Art. 15 de la Nueva Ley de Minería declaran la actividad minera de utilidad pública en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras, y consecuentemente determina que precede la constitución de las servidumbres que fueren necesarias para tal efecto.

Los titulares de derechos mineros pueden convenir con los propietarios del suelo sobre las extensiones de terreno que necesiten para sus instalaciones y construcciones, con destino exclusivo a las actividades mineras. (Art. 89 Ley No. 126; Art. 101 Actual Ley)

Para dar o facilitar ventilación, desagüe o acceso a otras concesiones mineras o a plantas de beneficio, fundición o refinación, podrán constituirse servidumbres sobre otras concesiones colindantes o en áreas libres. Consecuentemente ambos cuerpos legales sostienen la obligación que tiene el concesionario beneficiado de correr con los gastos que demande la constitución de estas servidumbres.

Las servidumbres se constituyen previa determinación del monto de la indemnización por todo perjuicio que causare al dueño del inmueble o al de la concesión sirviente, y no podrá ejercitarse mientras no se consigne previamente el valor de la misma.

La constitución de servidumbres sobre predios, áreas libres o concesiones, es esencialmente transitoria, su ejercicio y las indemnizaciones que correspondan se establecerán por mutuo acuerdo entre los interesados que se elevara a escritura pública y se inscribirá en el Registro Minero.

Estas servidumbres se extinguen con los derechos mineros y no pueden aprovecharse con fines distintos de aquellos propios de la respectiva concesión o planta; pueden ampliarse o restringirse según lo requieran las actividades de la concesión o planta.

De no existir un acuerdo entre las partes interesadas en la constitución de la servidumbre, la Ley de Minería No. 126 en su Art. 196 manifestaba:

El titular de una concesión minera o de una planta de beneficio, fundición o refinación que necesitare establecer una servidumbre en un terreno o en una concesión vecina y no llegare a un acuerdo con el dueño u ocupante legal del terreno o el concesionario vecino, podrá recurrir ante el Director Regional de Minería de la jurisdicción, para demandar la constitución de la respectiva servidumbre.²³

En cambio la nueva Ley de Minería en su Art. 103 sostiene, que de no existir un acuerdo para la constitución de las servidumbres, se puede acudir a la Agencia de Regulación y Control Minero, para que emita una resolución obligando a la constitución de estas.

3.8 CLASES DE SERVIDUMBRES

Dentro de este punto la actual Ley de Minería mantiene las mismas clases de servidumbres, así tenemos:

²³ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

- La de ser ocupados en toda la extensión requerida por las instalaciones y construcciones propias de la actividad minera.
- Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, andariveles, rampas, cintas transportadoras y todo otro sistema de transporte y comunicación.
- Las establecidas en la Ley de Régimen de Sector Eléctrico, (antes Ley Básica de Electrificación), para el caso de instalaciones de servicio eléctrico; y,
- Las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras.

3.9 DE LA INTERNACIÓN

Si bien la Ley de Minería concede el beneficio de las servidumbres incluidas las concesiones colindantes, igualmente prevé y protege perturbaciones entre titulares de derechos mineros, de esta manera tenemos que ambas leyes prohíben a los titulares de concesiones mineras, internarse con sus labores en concesión ajena sin permiso del colindante; el desacato a esta disposición es penado con paralizar los trabajos, a pagar el valor de los minerales que hubiere extraído, y a la indemnización por los perjuicios que cause.

En la figura de la internación se evidencia un cambio sustancial que incorpora la nueva Ley, el

cual es el reconocimiento de la denuncia de internación ante autoridad competente de la Agencia de Regulación y Control Minero, misma que presentada y previa investigación ordenará la suspensión de labores en la zona de litigio.

De igual forma los dos cuerpos legales contienen la Internación Dolosa que se transcribe a continuación:

Se presume de hecho, como dolosa, la internación que exceda los 20 metros medidos desde el límite de la concesión. Igualmente, se considerará dolosa la internación cuando se continuaren los trabajos después de decretada la suspensión de labores por la Agencia de Regulación y Control Minero. En estos casos, el pago del valor de los minerales extraídos o su restitución se efectuará sin deducción alguna y sin perjuicio de la responsabilidad penal de quien se interne para cometer el delito de usurpación.²⁴

²⁴ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

CAPÍTULO IV

LOS CONTRATOS MINEROS

De conformidad con lo prescrito en las dos leyes, las normas aplicables a los contratos relativos a derechos mineros y actividades de este sector, se rigen por las normas del derecho privado en todo cuanto no se oponga a estas.

Dentro de estas disposiciones se observa una gran diferencia, la cual es que para celebrar cualquier contrato minero se necesita la autorización expresa de la Agencia de Regulación y Control Minero, además la omisión de este requisito puede derivar en la caducidad.

Además estos cuerpos legales sostienen la obligación de celebrar todos los contratos mediante escritura pública, con la diferencia que anteriormente la ley sostenía que se los debía inscribir en el Registro de la Propiedad, mientras que la actual ley dispone que se los debe inscribir en la Agencia de Regulación y Control Minero. Simultáneamente dispone que todos los contratos mineros deben publicarse en los portales informáticos del Registro Minero que se encuentra a

cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero.

4.1 DE LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS

En este contrato se evidencia una similitud en conceptos y de aplicación de este, es así que ambas leyes sostienen que:

Los derechos mineros son susceptibles de cesión y transferencia entre vivos y de transmisión por causa de muerte y que dichas transferencias se perfeccionan con la inscripción en el Registro Minero.”; sin embargo hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la nueva Ley de Minería para realizar cualquier contrato minero se debe contar con la autorización de la Agencia de Regulación y Control Minero.²⁵

De igual forma manifiestan que los contratos de cesión o transferencia y de permuta de derechos y acciones sobre títulos mineros u otros derechos mineros no son rescindibles por lesión enorme.

4.2 DE LA PROMESA IRREVOCABLE

Dentro de esta figura jurídica ambas leyes sostiene el mismo criterio, el cual es: “Podrán celebrarse contratos de promesa irrevocable de cesión o transferencia de derechos y acciones

²⁵ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

sobre un título minero o en general en relación a cualquier otro derecho minero.”²⁶

Además menciona que en este tipo de contratos es facultativo para el promitente cesionario celebrar o no el contrato definitivo, pero es obligatorio para el oferente celebrar dicho contrato definitivo.

4.2.1 Legalización y Registro

Acorde a lo establecido por ambos cuerpos legales todos los contratos mineros se deben celebrar mediante escritura pública y deben ser inscritos en el Registro Minero.

4.3 CONTRATOS OPCIONALES

Existen figuras jurídicas que en la Ley 126 se encontraban reguladas y que la nueva Ley de Minería no las contempla, sin embargo de lo cual se las puede usar debido a que no se encuentran prohibidas ni tampoco van en contra de la ley vigente, tanto es así que estas se dan con el fin de proporcionar facilidades intrínsecas en el campo económico y técnico dentro de cualesquiera de las fases mineras, y son muy comunes en la legislación minera latinoamericana, permitiendo un mejor desarrollo de los trabajos mineros y consecuentemente la atracción de capitales, si se toma en cuenta que la minería conlleva un alto riesgo antes de entrar en producción, en el evento de que el yacimiento resultare rentable, de esta manera se

²⁶ Ibídem

describe la forma en que operaban con la Ley de Minería 126 y que pueden desarrollarse con la nueva Ley:

4.4 DEL ARRENDAMIENTO

Los contratos de arrendamiento sobre concesiones de explotación y de plantas de beneficio, fundición y refinación están sujetos al derecho común. El arrendatario solo podrá subarrendar las plantas con el permiso escrito del titular de la concesión, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones del titular frente al Estado. Prohíbese el subarrendamiento de concesiones mineras de explotación. (Art. 116 Ley No. 126)

Los contratos de arrendamiento de concesiones de explotación y de plantas de beneficio, fundición y refinación pueden celebrarse por un plazo que no exceda al constante en el título minero, en especie o en la forma que convengan los contratantes.

4.5 DE LA HABILITACIÓN MINERA

Dentro de las figuras contractuales que se están analizando, esta es la única que no se la puede efectuar con la nueva Ley de Minería, esto se da porque en la anterior Ley existía una regulación especial, misma que no se da con la nueva Ley, pero de igual manera explico a esta figura.

El contrato de habilitación minera es aquel por el cual una persona natural o jurídica nacional o extranjera, se obliga a facilitar fondos, bienes o servicios específicos para el desarrollo de la actividad minera al titular de una concesión de explotación, para cobrar ya sea en dinero o en especies.

La persona que se obliga a proveer de fondos, bienes o servicios específicos para el desarrollo de la actividad minera se llama Habilitador y el destinatario Habilitado.

El contrato de habilitación minera puede rescindirse en cualquier tiempo. Cuando este contrato es por cantidad, tiempo u obra determinados, cualesquiera de los contratantes puede retractarse en cualquier tiempo. Si quien se retracta es el habilitado, deberá pagar lo debido y si es el habilitador, perderá su crédito de habilitación, salvo otro acuerdo de las partes.

Los contratos de habilitación minera se sujetan a las disposiciones constantes en el artículo 1461 del Código Civil Ecuatoriano.

4.6 DE LA HIPOTECA

Los derechos reales que emanan de la concesión minera, así como las plantas de beneficio, fundición y refinación, pueden hipotecarse del mismo modo que los demás bienes inmuebles. Los derechos reales que emanan de las concesiones mineras solo podrán hipotecarse a consecuencia de préstamos dedicados exclusivamente a esta actividad. (Art. 126 Ley No. 126)

Los gravámenes que pesan sobre una concesión minera caducan al extinguirse esta, quedando la acción personal contra el deudor. El acreedor puede ejercer acciones judiciales hasta el remate del bien gravado.

4.7 DE LA UNIÓN TRANSITORIA

Los contratos de unión transitoria, son aquellos por los cuales las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, legalmente establecidas en el país, pueden celebrar contratos de este tipo, para el desarrollo de cualquier fase de la actividad minera y la ejecución de trabajos, proyectos, obras, servicios y suministros por un tiempo determinado

La principal característica de esta clase de contratos, es de que al momento de su celebración no constituye sociedad ni establece personería jurídica. Los derechos y obligaciones de las partes se rigen por lo acordado en el respectivo documento.

Pero eso sí, se presume la solidaridad y la responsabilidad ilimitada de las partes por los actos y contratos de la unión transitoria y por las obligaciones contraídas por ella frente a terceros.

4.8 DE LA OPERACIÓN

Mediante esta figura jurídica, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,

legalmente establecidas en el país, pueden celebrar contratos de operación para la ejecución de cualquier tipo de actividad minera.

En los contratos de operación minera el contratista invertirá sus propios recursos, a su exclusiva cuenta y riesgo, suministrando todo el capital y tecnología necesarios y realizando los trabajos especificados en el contrato, a cambio de una remuneración o participación porcentual de la producción o en los resultados. El contratante mantiene inalterable su derecho minero y las obligaciones contraídas frente al Estado o con terceros.

Adicionalmente hay que resaltar que la Ley de Minería vigente, contempla una nueva figura contractual, misma que se explica a continuación:

4.9 DE LA CESIÓN EN GARANTÍA

Figura contractual contemplada en el Art. 128, mismo que menciona:

Las construcciones, plantas de beneficio, fundición, refinación o los derechos que emanan del título minero, que existan en las concesiones pueden ser objeto de cesión en garantía. Los contratos de cesión en garantía sobre los bienes antes referidos, deberán otorgarse por escritura pública e inscribirse en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero.²⁷

²⁷ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

4.10 MODALIDADES CONTRACTUALES

La nueva Ley de Minería a diferencia de la anterior, contempla dos figuras contractuales obligatorias a los titulares de concesiones mineros que deseen realizar la explotación del material minero, mismos que deberán ser aprobados por el Ministerio Sectorial a través de un Acuerdo Ministerial, así tenemos:

4.11 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Esta figura es beneficiosa para el prestatario como para al Estado, ya que a este último le permite ahorrar el costo que implica la extracción del material, mismo que es muy elevado, en cambio el prestatario se encuentra exento del pago de regalías y los impuestos que se deriven de ganancias extraordinarias previstas en esta Ley. Es así que el Art. 40 de la presente Ley prescribe:

El Estado, a través del Ministerio Sectorial, podrá suscribir un Contrato de Prestación de Servicios en los términos y condiciones establecidas por el Ministerio Sectorial y las ofrecidas por el prestatario al momento de la adjudicación. El Contrato de Prestación de Servicios contendrá tanto la remuneración del prestatario minero como sus obligaciones en materias de gestión ambiental, presentación de garantías, relación con las comunidades y actividades de cierre parcial o total de la mina. El modelo de este contrato será aprobado por el Ministerio Sectorial mediante acuerdo ministerial. En este caso, el prestatario no estará obligado a pagar las regalías establecidas en la presente Ley ni los impuestos que deriven de ganancias extraordinarias.²⁸

²⁸ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

Cabe mencionar que dentro de este contrato, el prestatario asume obligaciones para con el Estado, además tiene los mismos derechos que se le otorga al concesionario en el Contrato de Explotación Minera, que se estudia a continuación.

4.12 CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA

Este contrato se encuentra regulado en el Art. 41 de la nueva Ley de Minería, mismo que sostiene:

En el plazo de seis meses desde la resolución que declara el inicio de la etapa de explotación, el concesionario minero deberá suscribir con el Estado, a través del Ministerio Sectorial, un Contrato de Explotación Minera que contendrá los términos, condiciones y plazos para las etapas de construcción y montaje, extracción, transporte, y comercialización de los minerales obtenidos dentro de los límites de la concesión minera.²⁹

Dentro de esta modalidad contractual el concesionario tiene obligaciones ambientales, sociales, tributarias y administrativas. Una de las mas importante son las regalías que debe pagar este por la extracción de los recursos. Simultáneamente se le otorga derechos y dentro de estos el que más importancia cobra es la facultad que tiene el concesionario para suspender las actividades mineras cuando por condiciones técnicas o de mercado le impidan cumplir con los plazos establecidos para cada una de las etapas y actividades contenidas en el contrato de explotación.

²⁹ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

Tanto en el contrato de prestación de servicios como en el de explotación, las controversias que pudieren surgir de estos solo se las podrá ventilar ante los Jueces de la Función Judicial del Ecuador o de una instancia de arbitraje en Latinoamérica.

4.13 DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES

Si bien es cierto que se trata del análisis de derechos mineros otorgados por el mismo Estado, este régimen no está contemplado dentro del capítulo de las concesiones, por cuanto su otorgamiento debe reunir determinados requisitos, distintos al de las concesiones, y además porque eminentemente trata de minería a pequeña escala y que por lo general requiere de la celebración de los contratos a los que se ha hecho referencia anteriormente, y así tenemos lo siguiente:

4.14 DEL CONDOMINIO MINERO

Los mencionados cuerpos legales son similares en cuanto se refiere al mencionar esta figura jurídica, ambos sostienen que se constituye condominio sobre una concesión minera, cuando el Estado otorga el título minero a varias personas naturales que la hayan solicitado mediante una sola petición. El condominio no supone la existencia de una compañía legalmente constituida. La constitución del condominio minero lleva implícito el derecho poder celebrar contratos mineros con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

4.15 DE LA MINERÍA DE SUSTENTO, PEQUEÑA MINERÍA, MINERÍA ARTESANAL Y MINERÍA A GRAN ESCALA.

La legislación minera regula diferentes tipos de minería, esto con el fin brindar facilidades a los concesionarios ya que como se sabe el desarrollar actividades mineras conlleva una gran inversión económica, es así que tenemos:

4.15.1 Minería en pequeña escala

Este tipo de minería se encontraba regulada por la Ley de Minería No. 126, y manifestaba que se considera minería en pequeña escala, a las operaciones que realicen los titulares de las concesiones mineras cuando la concesión tenga una superficie máxima de 150 hectáreas mineras, si la extracción del mineral no superaba las 100 toneladas métricas por día y la inversión no exceda de un millón de dólares de los Estados Unidos de América.

4.15.2 Minería artesanal y de sustento

Esta clase de minería no era regulada por la Ley 126, la minería artesanal se la entendía por tácita y se la intentaba regular únicamente mediante resoluciones administrativas, pero a raíz de la publicación de la nueva Ley de Minería se empieza a normar este tipo de minería, de esta manera el mencionado cuerpo legal en su Art. 134 prescribe:

Se considera minería artesanal y de sustento aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta ley y su reglamento y que se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas.³⁰

Además se dispone el plazo máximo de 10 años para realizar labores de minería artesanal, mismo que se puede renovar por un periodo similar, previa solicitud del concesionario. De igual manera se exime de la obligación de pagar regalías.

4.15.3 Pequeña minería

Esta variedad de minería fue incorporada por la nueva Ley de Minería y confiere el derecho al concesionario de prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias que puedan obtenerse con las limitaciones que prescribe esta, a diferencia de la Ley No. 126 que solo regulaba la minería en pequeña escala. El Art. 138 de la Ley vigente determina:

Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del área de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones y condiciones tecnológicas, tengan: a) Una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas métricas por día; y, b) Una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con relación a la minería de no metálicos y materiales de construcción.³¹

³⁰ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

³¹ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

En consecuencia para poder llevar a cabo la pequeña minería se debe ser titular de una concesión minera, misma que es otorgada por el Ministerio Sectorial; adicionalmente el titular de la concesión para poder ejercer los derechos que se desprenden del título minero debe registrar su condición de pequeño minero ante autoridad administrativa minera del Ministerio Sectorial.

4.15.4 Minería a gran escala

Se considera minería a gran escala a aquella que supera la explotación de 300 toneladas por día, y ambos cuerpos legales mantienen las mismas regulaciones técnicas y ambientales. Hay que tomar en cuenta que la normativa ambiental vigente busca aplicar de una manera eficiente, severa y ejemplificativa sus regulaciones y sanciones para de este modo erradicar este mal que tanto aqueja.

4.16 DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En lo referente a los materiales de construcción se puede evidenciar una variación sustancial en cuanto al ente que otorga la concesión en este caso en particular, con el anterior cuerpo legal la otorgaba y regulaba la Dirección Regional de Minería correspondiente, mientras que actualmente la otorga el Ministerio Sectorial, pero la regula cada Gobierno Municipal mediante las ordenanzas municipales que se emitan para el efecto.

Adicionalmente ambas leyes plantean la obligación de obtener los informes previos para poder

ser concesionario, esto siempre y cuando se los necesite.

4.17 LIBRE APROVECHAMIENTO

Dentro de esta regulación la Ley de Minería No. 126 sostenía que el libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas, solo podrá realizarse en áreas no concesionadas, en cambio la nueva Ley introduce un cambio trascendente el cual es que se puede aprovechar estos materiales en áreas concesionadas o no.

Además estas dos leyes manifiestan que la vigencia y volúmenes de explotación se los realiza en proporción a la ejecución de la obra pública para la cual fue autorizado y que los materiales obtenidos producto de esta explotación solo pueden ser utilizados para el fin establecido, caso contrario se constituye en explotación ilegal.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS Y ECONÓMICAS

5.1 DERECHOS DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Los derechos de tramite administrativos se encuentran contenidos en los dos cuerpos legales, la Ley 126 prescribe que los interesados en la obtención de concesiones mineras pagaran en concepto de derechos por cada tramite de solicitud de concesión minera y por una sola vez, cien dólares de los Estados Unidos de América, en tanto que la nueva Ley de Minería mantiene el mismo concepto pero con la diferencia que se debe cancelar cinco remuneraciones básicas unificadas. En ambos casos el valor de este derecho no será reembolsable.

5.2 PATENTES MINERAS

En este punto igualmente creo indispensable señalar que hasta agosto del 2000, la Ley de

Minería No. 126 preveía el pago de patentes mineras y regalías mineras, esto para las fases de exploración y explotación respectivamente, pero con las reformas al citado cuerpo legal, las regalías mineras fueron abolidas, no obstante con la creación de la nueva Ley de Minería se vuelve a incorporar el pago de patentes y regalías, es por eso que a continuación se analiza como en la actualidad se dividen las patentes mineras.

5.2.1 Patente de conservación

Esta patente se la cancela tanto en la etapa de exploración como explotación. De esta manera tenemos que la Ley 126 sostenía que las concesiones mineras pagaran por cada hectárea minera una patente anual de conservación, en dólares de los Estados Unidos de América, por adelantado y por cada año calendario, en el transcurso del mes de marzo, de acuerdo con la siguiente escala:

VIGENCIA DE LA CONCESION		MONTO ANUAL POR HECTAREA MINERA
DESDE	HASTA	
Año cero	año tres	1,0 US\$
Año cuatro	año seis	2,0 US\$
Año siete	año nueve	4,0 US\$
Año diez	año doce	8,0 US\$
Año trece	en adelante	16,0 US\$

El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del término de quince días contados a partir de la fecha de suscripción del documento en el que se deje

constancia de la aptitud del área para ser concesionada y corresponderá al lapso que decurre entre la fecha de presentación de la solicitud de la concesión y el 31 de diciembre de ese año. En tanto que la Ley vigente en su Art. 34 prescribe:

Hasta, única y exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá el año calendario en curso a la fecha del pago. La patente de conservación desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 de diciembre del año en que venza el período de vigencia de exploración inicial, equivaldrá al 2,5 por ciento de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada. Esta patente de conservación se aumentará al 5 por ciento de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada para el período de exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento. Durante la etapa de explotación de la concesión minera, el concesionario deberá pagar una patente de conservación equivalente al 10 por ciento de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada. El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha del otorgamiento del título minero y corresponderá al lapso de tiempo que transcurra entre la fecha de otorgamiento de la concesión y el 31 de diciembre de dicho año.³²

Adicionalmente hay que recalcar que este cuerpo legal regula el monto que deben pagar las concesiones de pequeña minería, mismo que es de dos (2) dólares de los Estados Unidos de América por hectárea minera durante la fase de exploración inicial. En la fase de exploración avanzada y de evaluación, de cuatro (4) dólares de los Estados Unidos de América por hectárea minera y en el período de explotación, por el área declarada en producción comercial, pagará diez (10) dólares de los Estados Unidos de América por cada hectárea minera.

³² Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

5.2.2 Patente de producción

Con la vigencia de la nueva Ley de Minería, esta patente fue suprimida debido a que se incorporó el pago de regalías, mismas que suplen a esta. Sin embargo a continuación explico el contexto en el que se debía cumplir con la misma. La Ley 126 prescribía que desde el inicio de la producción comercial, el concesionario minero pagara una patente anual estable, por cada hectárea minera manifestada en producción, de 16 dólares de los Estados Unidos de América.

5.3 REGALÍAS

Dentro de esta obligación hay que mencionar que esta no se encontraba regulada en la anterior Ley, pero se la incorporo en la actual Ley debido a los perjuicios económicos de los que era objeto el Estado y la comunidad donde se desarrollan las actividades mineras.

De esta manera tenemos que están obligados a cancelar una regalía al Estado, los concesionarios mineros que realizan labores de explotación, mismas que se las debe de cancelar de manera semestral en los meses de marzo y septiembre de cada año.

Partiendo de esta premisa, se desprende que los beneficios económicos de los cuales participara el Estado, no pueden ser menores a los del concesionario que los explota.

Así el Art. 93 de la Ley vigente prescribe:

.....el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado.³³

Adicionalmente los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagaran el 3% por concepto de regalías, mientras que para la explotación de minerales no metálicos se calculara en base a los costos de producción.

Este es uno de los mayores cambios que sufrió la Ley de Minería pero que a su vez va a ayudar a la mejor distribución de la riqueza y a controlar la debida explotación de los recursos naturales de los cuales es dueño el Estado ecuatoriano.

Cabe recalcar que las dos leyes sostienen que la evasión del pago de patentes como de regalías es causal de caducidad.

5.4 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Dentro de este punto vale expresar que se ha dado una reestructuración en cuanto al reparto de

³³ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

estos ingresos a las arcas erarias del Estado. La Ley No. 126 disponía que los recursos provenientes del pago de patentes de conservación y producción, servirán para financiar la administración de recursos mineros, que incluye la Dirección Nacional de Minería y la Dirección Nacional de Geología, y para el mantenimiento y desarrollo de los Sistemas de Administración y de Información Mineras (SADMIN y SIM).

Además el tercer artículo innumerado añadido al artículo 25 de la Ley de Minería No.126, determina que el excedente de los recursos señalados anteriormente, se distribuirá de la siguiente manera: 50% para las municipalidades en cuyas circunscripciones se ubiquen las concesiones mineras, que será destinado de forma exclusiva para obras de infraestructura comunitaria; el 20% para los consejos provinciales en cuya circunscripción se ubiquen las concesiones mineras, que será igualmente destinado de forma exclusiva para obras de infraestructura comunitaria, 15% a la fuerza pública; y, 15% para los institutos estatales de educación superior que cuenten con facultades de Geología, Minas o Medio Ambiente.

Mientras que con la Ley vigente los recursos se los distribuye de la siguiente manera: el 60% de la regalía será destinado para proyectos productivos y de desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje a las instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. Estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la actividad minera.

De esta manera se está dando una mejor distribución de la riqueza y prestando mayor atención a las poblaciones que verdaderamente resultan afectadas por la actividad minera que se desarrolla en ellas, así se vuelve prominente el desarrollo y crecimiento social y educacional

de estas regiones.

5.5 EXPLOTACIÓN ILÍCITA

Este tema se lo trata dentro del presente capítulo tomando en consideración que el cometimiento de este delito perjudica enormemente al erario nacional, a la vez que genera recursos económicos por las multas que eventualmente impone el Estado a los infractores. Por tanto pasaremos a analizar la presente figura jurídica.

La Ley de Minería No. 126 prescribía que se consideraba explotación ilícita cuando se realice operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales sin tener el respaldo legal respectivo de la autoridad minera, es decir exclusivamente a la explotación. En tanto que la actual Ley de Minería en su Art. 56 determina:

Incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente.³⁴

Es decir que la principal diferencia se encuentra en que ahora el delito de explotación ilícita comprende mayor campo de acción, ya no se limita simplemente a la explotación sino a todas las fases de la actividad minera.

³⁴ Ley de Minería, Suplemento del Registro Oficial de 29 de Enero de 2009.

Dentro de las sanciones que contiene este delito se sigue manteniendo el decomiso de los productos objeto del delito, así como de la maquinaria, equipos o implementos utilizados en su comisión, además de una multa, misma que con la anterior ley era de 200 salarios mínimos vitales generales, mientras que con la ley vigente esta multa es equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente.

CAPÍTULO VI

DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER CONCESIONES MINERAS

6.1 PROCEDIMIENTO

Dentro de este punto se realiza una síntesis de todo el proceso que se debe de seguir para obtener una concesión minera, es decir desde la petición hasta el otorgamiento del título minero, hay que hacer énfasis en que el procedimiento ha variado sustancialmente, por lo que iniciare describiendo el que planteaba la Ley de Minería No. 126 y posteriormente el de la Ley vigente.

Ley No. 126.- Se inicia con una solicitud que debe ser presentada en la Dirección Regional de Minería de la jurisdicción minera que corresponda. Al momento de ser presentada la solicitud con los formularios completamente llenos que proporciona la Dirección Nacional de Minería, para fines del trámite y procedimiento informático de datos que aplique y desarrolle permanentemente esa dependencia, se sentara fe de presentación de la misma, con la firma del

Secretario de esa Dirección Regional de Minería, indicándose la fecha, hora y minutos en letras.

Las solicitudes que no tengan al menos, nombre y apellidos, cedula de identidad, Registro Único de Contribuyentes, razón social o denominación del solicitante, según fuera el caso, las coordenadas UTM del área objeto de la solicitud y la designación del casillero judicial para recibir notificaciones, no admiten la generación del tramite minero correspondiente y, consecuentemente, no serán procesadas en el sistema administrativo y catastral informático minero.

La referencia de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos que se mencionan en el artículo 14 del Reglamento General de la Ley de Minería No. 126, constaran en orden sucesivo en acta de un libro especial que será suscrita por el Director Regional de Minería, el interesado y el Secretario, sin que puedan llenarse los espacios que por efecto de impresión pudieran quedar luego de las firmas de un acta y el inicio secuencial de otra. En todo caso cualquier razón se hará constar al margen del acta respectiva.

Una vez elaborada el Acta a la que se hace mención anteriormente, y si se encontrare presente el peticionario o su representante legalmente acreditado, se procederá a firmarla inmediatamente, caso contrario se le notificara convocándole para su suscripción dentro de un término de cinco días contados a partir de la notificación.

Si a pesar de haber sido legalmente notificado, el peticionario no concurriere a la suscripción del acta en el termino señalado, el expediente será automáticamente archivado y la graficación del área materia de la solicitud, eliminada del Catastro Minero.

Si la solicitud para el otorgamiento de una concesión minera corresponde a la jurisdicción de dos o más Direcciones Regionales de Minería, esta se presentara en la jurisdicción donde se encuentre la mayor parte del área solicitada.

Los requisitos que debía cumplir la petición para obtener una concesión minera son:

- Nombres, apellidos, numero de documento de identificación y domicilio del solicitante, en tratándose de personas naturales. Para el caso de personas jurídicas, razón social o denominación, numero del Registro Único de Contribuyentes, acompañando copia certificada de la escritura pública de constitución debidamente inscrita o del acto por el cual se haya reconocido su personería; así como del nombramiento del representante legal, con indicación del domicilio de la peticionaria. En caso de solicitudes bajo la modalidad de condominio, se acompañara la escritura pública que acredite la designación del procurador común.

La presentación de los documentos que se mencionan con anterioridad, releva a los peticionarios de la entrega de otros ejemplares para el caso de las solicitudes análogas o nuevas. Sin embargo, dichos peticionarios estarán obligados a mencionar en sus solicitudes el expediente o trámite en el cual obren tales documentos.

- Nombre o denominación del área materia de la solicitud.
- Ubicación del área, señalando el lugar, parroquia, cantón y provincia.

- Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo para el que se solicita la concesión.
- Coordenadas U.T.M., correspondiente al sistema de cuadrícula de la Carta Topográfica Nacional, tanto del punto de partida, como de los demás vértices del polígono del área.
- Graficación del área solicitada a escala 1:25.000 en un mapa topográfico editado por el Instituto Geográfico Militar. De no existir este, dicha graficación se efectuara en mapa topográfico a escala 1:50.000 editado por el mismo instituto.

El mapa llevará la firma del interesado y de su asesor técnico en materia geológico- minera. Se consignara en él, el punto de partida que estará representado por un círculo, el perímetro de la concesión con línea continua negra. En esta graficación deberá indicarse las coordenadas U.T.M. de punto de partida y numerarse sus vértices en sentido de la manecilla del reloj.

Respecto de las áreas donde no se haya levantado mapas topográficos se presentara en una carta croquis planimétrica, editada por el Instituto Geográfico Militar, de no existir esta, se presentara un plano de ubicación diseñado en base de imágenes de satélite, de radar o fotografías aéreas.

- La declaración expresa de asumir la obligación de presentar y cumplir los estudios ambientales en la forma y condiciones que se establecen en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador.

- La declaratoria expresa de asumir la obligación de obtener los informes a los que se refiere el artículo 11 de la Ley de Minería, en caso de requerírselos; y,
- La designación del lugar en donde habrá de notificarse al solicitante, ubicado en la ciudad sede de la Dirección Regional de Minería, el cual corresponderá al Casillero Judicial del Abogado del peticionario.

Si la solicitud no cumple cualesquiera de los requisitos señalados anteriormente, o si luego de la verificación en el catastro minero se comprobare que el área se encuentra parcialmente superpuesta a otra concesión o solicitud anterior, el Director Regional de Minería, en la misma acta a la que se hace referencia, indicara sus defectos u omisiones y ordenara que el solicitante los subsane dentro del término de 10 días a contarse desde la fecha de suscripción del acta, subsistiendo para todos los efectos legales la fecha de presentación inicial.

Si a pesar de haber sido legalmente notificado el peticionario no atiende los requerimientos en el término señalado, el expediente será automáticamente archivado y la graficación del área materia de la solicitud, eliminada del Catastro Minero.

Luego existe la etapa de conocimiento de oposiciones, que mencionaba:

.....desde la fecha en que se publique en los carteles de la Dirección Regional de Minería respectiva se difunda vía Internet el extracto de la solicitud, fijación y difusión estas que se efectuaran hasta las doce horas del día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, y hasta el quinto día después de la fijación y difusión del

mencionado extracto, los titulares de derechos mineros que consideren estar afectados por superposiciones parciales o totales o los peticionarios que aleguen prioridad sobre el área solicitada podrán oponerse, para lo cual harán conocer por escrito a la Dirección Regional de Minería sobre la existencia de sus derechos, adjuntando los documentos señalados en el artículo 55 del Reglamento sin los cuales no se puede tramitar una oposición, y que son:

a) En el caso de oposición por superposición, copia del título minero y certificación actualizada de su inscripción en el Registro Minero a cargo del Registrador de la Propiedad y certificado de pago de patentes; y,

b) En el caso de oposición por prioridad, copia certificada de la solicitud con fe de presentación y la certificación que acredite que tal solicitud se encuentra en trámite, incluyendo copia certificada del plano respectivo.

Si la oposición deducida cumple los requisitos establecido en el artículo 55 del Reglamento, el Director Regional de Minería la aceptara a trámite y ordenara se notifique con ella al solicitante de la concesión para que la conteste en el término de cinco días.

Con la contestación o en rebeldía, el Director Regional de Minería, en el término de cuarenta y ocho horas, dictara resolución aceptando o negando la oposición y continuara el trámite de la concesión de conformidad con las normas pertinentes. La oposición que no reúna los requisitos señalados en la norma legal antes invocada, será rechazada por el Director Regional de Minería, quien ordenara además se continúe con el trámite de otorgamiento de la concesión.³⁵

Después de haber superado la etapa de oposiciones viene el otorgamiento del título minero, mismo que se lo concede una vez suscrita el Acta y/o subsanados los defectos u omisiones, en el término de dos días y mediante resolución emitida por el Director Regional de Minería, documento que para su validez, queda sujeto al cumplimiento de los actos de protocolización e inscripción.

Ley Actual.- En este cuerpo legal se ha variado el modo mediante el cual se obtiene una concesión minería metálica, sin embargo en cuanto a las concesiones mineras no metálicas se sigue manteniendo el proceso anteriormente descrito, es decir mediante una solicitud y cumpliendo con todos los requisitos que determina la nueva Ley de Minería, con la única variación que para poder ser concesionario minero todo interesado debe previamente

³⁵ Ley de Minería No. 126, Suplemento del Registro Oficial No 695 de 31 de mayo de 1991.

registrarse en el Ministerio Sectorial.

A continuación se explica el modo mediante el cual se otorga una concesión minera metálica.

Debemos partir diciendo que ese tipo de concesión se la otorga vía subasta y remate público. Y que se subasta y remata única y exclusivamente las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Minero emitido por la SEMPLADES.

Inicialmente el Ministerio Sectorial convoca a la subasta y remate mediante tres publicaciones en dos diarios de circulación nacional y local así como en la página de esta entidad, esta convocatoria se le efectúa sesenta días hábiles antes del día fijado para el remate o subasta y la presentación de posturas contados desde la última publicación.

Las posturas de los interesados deben de ser presentadas en el lugar, día y hora señalados, en sobres cerrados, y deben de contener:

- Nombres completos, razón social o denominación del oferente;
- Nombramiento o poder del representante legal en caso de que la oferente sea una persona jurídica;

- Propuesta técnica y ambiental para el proceso de exploración y explotación; y,
- Una garantía equivalente al dos por ciento (2%) sobre el valor base de la inversión determinada en las especificaciones técnicas del proceso, emitida por una institución del sistema financiero nacional, o extranjera a través de su corresponsal ecuatoriano. Para los casos de minería a gran escala la institución que emita la garantía deberá tener una calificación de riesgo al menos de doble AA o su similar en los casos en los que no exista dicha categorización, las mismas que deberán ser avaladas por las instancias de control del sistema financiero ecuatoriano.

Para todos los oferentes, será siempre necesaria la presentación del plan de manejo ambiental cuando fuere pertinente.

Una vez transcurridos seis días hábiles y receptadas las ofertas, se convoca a los oferentes habilitados e idóneos al proceso de puja, mismo en el que se evaluará los puntos descritos en el Art. 32 del Reglamento General de la Ley de Minería, esto es:

a) La oferta económica, sobre la base y puntuación de los siguientes criterios:

- Historial y tipo de compañía
- Plan y montos de inversión para el proyecto

- Desempeño económico/financiero de la compañía
- Capital e índices económicos.

b) La oferta técnica, sobre la base y puntuación de los siguientes criterios:

- Características de la campaña o plan de exploración
- El tipo de operaciones que tienen actualmente en el país y fuera de él
- Registro técnico de sus operaciones
- Activos que respaldan su operación
- Certificado o informe sobre accidentalidad y seguridad laboral

c) La oferta ambiental, sobre la base y puntuación de los siguientes criterios:

- Propuesta de Plan de Manejo Ambiental y de cierre de mina

- Historial ambiental
- Informe sobre incidentes ambientales

Inmediatamente de calificadas las posturas, el Ministerio Sectorial escogerá la mejor oferta técnica, ambiental y económica para adjudicar el área minera materia de la subasta y suscribirá el Acta de Adjudicación en un plazo no mayor de quince días. En esta acta ordenara la graficación del área en el Catastro Minero, la emisión del título minero en el término de cinco días, su protocolización en una notaria pública y su inscripción en el Registro Minero en un plazo máximo de treinta días.

Es obligación del concesionario remitir al Ministerio Sectorial una copia del título minero debidamente registrado, para los fines pertinentes.

6.2 DE LA INSCRIPCIÓN

En este aspecto ambas leyes sostienen la obligación de los titulares de derechos mineros de inscribir en el Registro Minero, los títulos mineros, contratos mineros y actos que requieran de esta solemnidad.

El plazo para la inscripción del título minero es de 30 días contados a partir del otorgamiento del mismo.

La principal diferencia en este tópico es que con la Ley anterior el Registro y Catastro Mineros se encontraba a cargo del Registro de la Propiedad, mientras que actualmente está a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Cabe mencionar que en la antepuesta Ley se hallaba descrito la inscripción tardía, que consistía en registrar el título minero hasta 90 días después del otorgamiento de éste, siempre que esto se daba a un caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado. Si bien es cierto la Ley vigente no contempla inscripciones tardías, se vuelve ilógico el pensar que un caso como los descritos anteriormente no se conceda una prórroga para poder inscribir el título minero; en lo que a mí respecta, pienso que a través de una resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero se puede dar una prórroga para registrar el título en el Registro Minero.

6.3 REDUCCIÓN Y RENUNCIA DE HECTÁREAS MINERAS

En la presente figura jurídica, esta dualidad de leyes sostienen que se puede renunciar a una o más hectáreas mineras comprendidas en una concesión minera constituida, siempre que con la renuncia no se perjudique el derecho de terceros. La renuncia que no abarque el total de hectáreas mineras de la concesión se denomina parcial.

Se debe tomar en cuenta que la aprobación de la renuncia constituye procedimiento de jurisdicción voluntaria, el cual puede transformarse en contencioso, si se formula oposición por parte de terceros perjudicados.

La solicitud de renuncia con la anterior ley se la presentaba ante la Dirección Regional de Minería, en la actualidad se la debe de presentar ante el Ministerio Sectorial y en ella se pedirá expresamente que se ordene la cancelación de las inscripciones respectivas.

Antes a la solicitud se debía de acompañar los siguientes documentos:

- a) Título de la concesión;
- b) Comprobante del pago de patentes al día; y,
- c) Certificados actualizados de hipotecas, servidumbres y otros gravámenes que pesen sobre la concesión.

Mientras que la nueva Ley de Minería prescribe que se deben de acompañar los siguientes documentos:

- a) Título de la concesión;
- b) Certificado de pago de patentes de conservación y pago de regalías, si fuere del caso o copia certificada de los respectivos comprobantes;

c) Certificado conferido por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del título de la concesión, los gravámenes limitaciones o prohibiciones que existan respecto del mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que consten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;

d) Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental respecto del área materia de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad ambiental competente;

e) Determinación del número de hectáreas mineras materia de la reducción o renuncia;

f) En caso de reducción, determinación del número de hectáreas a reducirse y número de hectáreas respecto de las cuales se conservará el derecho minero; y,

g) Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión minera reducida.

Hay que tomar en cuenta que si de los antecedentes de la solicitud apareciera que la renuncia o reducción afecta o puede afectar los derechos de terceros, se ordenara que el renunciante, acredite mediante escritura pública, el consentimiento de aquellos para la renuncia o, en su defecto, se practique la notificación respectiva a través de la prensa. Esta notificación se la hace por una sola vez en la prensa.

Un punto importante que recalcar es que la nueva Ley dispone socializar la renuncia a través de tres publicaciones en la prensa además de ubicar carteles en el cantón o parroquia donde se encuentre la concesión.

Cumplidos los requisitos determinados anteriormente y solucionadas las oposiciones, si las hubiere, una vez aprobada la renuncia, otorgara la correspondiente escritura pública, en la que se identificara por su nombre a la concesión que comprende las hectáreas mineras materia de la renuncia, mencionando los datos de inscripción de la concesión.

Finalmente este proceso surte efecto con la inscripción en el Registro Minero.

6.4 EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS

Los dos cuerpos legales objeto de este análisis contiene dos formas esenciales de extinguir los derechos mineros, el cumplimiento del plazo de la concesión y de la reducción o renuncia de la misma.

La Ley de Minería No. 126 contiene solo dos formas de poder extinguir los derechos mineros y estas son:

- Caducidad por Falta de Pago.- Las concesiones de explotación caducan de inmediato e

irrevocablemente, cuando sus titulares mineros han dejado de pagar las patentes de conservación, de producción, por un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible.

- Nulidad de Concesiones.- Es nula la concesión de los derechos mineros otorgados en contravención al artículo 14 de la Ley de Minería No. 126 y la otorgada sobre una concesión legalmente válida e inscrita, en la parte en que se superponga a esta.

La Ley de Minería Vigente prescribe ocho causales por las cuales extinguir los derechos mineros y son:

- Caducidad por falta de pago.- Las concesiones caducan cuando sus titulares han dejado de pagar las patentes, regalías y demás derechos o tributos establecidos en la ley.
- Caducidad por no presentación de informes de exploración o por no acreditación de actividades e inversiones mínimas.- Será causal de caducidad la falta de presentación ante el Ministerio Sectorial del informe anual de las actividades e inversiones en exploración realizadas en el área de la concesión minera.
- Caducidad por no presentación de informes de producción.- Caducará la concesión minera de cuyos titulares no acompañen dentro del plazo establecido en la presente ley, los informes auditados respecto de su producción.

- Caducidad por explotación no autorizada y por presentación de información falsa.- Caducará la concesión minera en caso que su titular realice labores de explotación, directa o indirectamente, con anterioridad a la suscripción del Contrato de Explotación Minera respectivo.

Asimismo, caducará la concesión minera en caso que los informes que señala esta ley contengan información falsa o que maliciosamente altere sus conclusiones técnicas y económicas.

- Caducidad por alteración maliciosa de los hitos.- La alteración maliciosa de los hitos demarcatorios debidamente comprobada, será causal de caducidad de la concesión minera.
- Caducidad por Declaración de Daño Ambiental.- El Ministerio Sectorial deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras cuando se produzcan daños ambientales, sin perjuicio de la obligación del concesionario de reparar los daños ambientales causados.
- Caducidad por daño al Patrimonio Cultural del Estado.- El Ministerio Sectorial, previo informe técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras en el caso de que sus actividades hubieren producido un daño grave, permanente o irreparable al patrimonio cultural del Estado; y,

- Caducidad por Violación de los Derechos Humanos.- El Ministerio Sectorial deberá declarar la caducidad de una concesión minera si se ha producido violación de derechos humanos, ya sea por parte del concesionario o de sus representantes, así como de sus contratistas, especialmente de las compañías de seguridad que actúen en nombre del concesionario o quien haga sus veces, para lo cual deberá contar previamente con sentencia ejecutoriada dictada por Juez competente que determine violación de derechos humanos.

6.5 CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Con la extinción de los derechos mineros, misma que debe ser declarada mediante resolución anteriormente por parte del Director Regional de Minería y con la nueva Ley por el Ministerio Sectorial, el área minera queda libre y por tanto susceptible de ser requerida por cualquier persona natural o jurídica.

Por la extinción de los derechos mineros, el ex-titular no pierde su derecho de propiedad sobre edificaciones, maquinarias, instalaciones y demás elementos de trabajo, mismos que pueden ser retirados.

6.6 DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Al tratar este capítulo encontramos que existe una gran similitud en cuanto a las obligaciones

ambientales que deben de cumplir los concesionarios mineros, teniendo presente que anteriormente se cumplía de un talante ínfimo con estas regulaciones, de esta manera paso a describir estas.

La principal obligación que deben cumplir los titulares de concesiones es el presentar previo al otorgamiento del título minero Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental, la variación que presentan estos cuerpos legales es que antes éstos eran aprobados por la Subsecretaria de Medio Ambiente del Ministerio de Minas y Petróleos, mientras que en la actualidad los aprueba el Ministerio del Ambiente y al aprobarlos otorga la respectiva Licencia Ambiental.

De igual manera los concesionarios mineros que utilicen aguas para sus trabajos y procesos, tienen la obligación de devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de contaminación, siempre tomando en cuenta los límites permisibles. Hay que tomar en cuenta que la nueva Ley dispone el deber permanente de los titulares de reutilizar el agua a través de sistemas de recirculación.

Adicionalmente los concesionarios que para desarrollar actividades mineras deban talar capa vegetal, están en la obligación de reforestar la zona que deforestaron de preferencia con especies nativas, esta obligación va de la mano con la de conservación de la flora y fauna. Además deben de contar con medidas de protección del ecosistema. Simultáneamente deben manejar los desechos producto de la actividad minera acorde a las normas y exigencias ambientales vigentes y no pueden arrojar desechos no tratados.

Una obligación que incorpora la nueva Ley de Minería es la de incorporar al Plan de Manejo

Ambiental, información de inversiones y actividades para el cierre o abandono parcial o total de operaciones y para la rehabilitación del área afectada.

Sin bien es cierto estas regulaciones mantienen una gran similitud, se debe tomar en cuenta que debido al manejo político del gobierno de turno y el carácter de ambientalista que mantiene este, con esta nueva ley se va a controlar rigurosamente el cumplimiento de estas obligaciones, además no se debe olvidar la severidad del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras.

6.7 DE LA GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Se debe comenzar mencionando que la participación social no era tomada en cuenta en la anterior legislación, sin embargo en la práctica y por la experiencia adquirida en este tema, debo indicar que siempre se ha mantenido una comunicación directa con las comunidades donde se desarrolla una actividad minera, tanto es así que se coopera al desarrollo de estas agrupaciones sociales con la construcción de centros educativos, dispensarios médicos y hasta brindando empleo a estos.

Con lo antes expuesto se analiza la nueva normativa que contiene la Ley de Minería en este tema.

La Ley vigente sostiene la responsabilidad del Estado de ejecutar los procesos de participación y consulta social, esto a través de las instituciones públicas que correspondan; teniendo en

cuenta que esta obligación es indelegable a cualquier instancia privada. Estos procesos tienen por objeto promover la participación social en materia ambiental y el desarrollo de las localidades ubicadas en las áreas de influencia de esta actividad.

6.7.1 Procesos de información

En este proceso se genera la obligación del concesionario a partir del otorgamiento de una concesión minera de informar a las autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados, comunidades y entidades que representen intereses sociales, ambientales o gremiales, acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos de la actividad minera; esta obligación existe en todas las etapas de la concesión.

6.7.2 Procesos de participación y consulta

Este proceso tiene por finalidad considerar e incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y ambiental de los proyectos mineros.

Dentro de este existe un proceso especial de consulta a los pueblos, nacionalidades y comunidades, cuando la actividad minera se vaya a realizar en sus tierras y que puedan afectar a estas, dicha consulta es obligatoria y se la hace en concordancia del proceso establecido en el

Art. 398 de la Constitución de la República.³⁶ Consulta esta que si obtiene como resultado una oposición mayoritaria da la facultad de decir al Ministerio Sectorial si se procede o no con la actividad minera en el área objeto de la consulta.

6.7.3 Denuncias de amenazas o daños sociales

Este capítulo contiene la posibilidad que tiene cualquier persona natural o jurídica de realizar una denuncia ante el Ministerio del Ambiente cuando actividades mineras generen impactos sociales, culturales o ambientales. Esta denuncia debe de cumplir con los mismos requisitos y formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

Se considera importante el resaltar que todas estas reformas fueron incluidas debido a que en épocas anteriores existía una despreocupación desmesurada en cuanto al cuidado y manejo ambiental y si bien es cierto había procesos que se podía seguir por afecciones ambientales, no eran lo suficientemente estrictas como para sanear este problema que aqueja no solo al Ecuador sino al mundo entero.

³⁶ **Constitución de la República.** Art. 398. Consulta a la comunidad por afecciones al ambiente.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

CAPÍTULO VII

MARCO JURÍDICO CONEXO

Como ya se mencionó al inicio del presente trabajo, el artículo 2 y 3 respectivamente de la Ley de Minería tiene como normas supletorias a falta de disposición en dicho cuerpo legal, las constantes en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías y demás disposiciones de la legislación positiva.

Para que exista una mejor comprensión del alcance del derecho minero dentro del territorio nacional y los beneficios que puede dar a la economía del país, se hace necesaria la transcripción de varios artículos de códigos y leyes que tienen estrecha relación y concordancia con la Ley de Minería, y así tenemos:

7.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Las disposiciones de la Constitución referente a la actividad minera están un tanto dispersas, por lo que tratará de ponerlas en la secuencia lógica más entendible para quienes consulten este trabajo.

Art. 1.-..... Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

2.-..... Se prohíbe el trabajo de menores de quince años

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna.

Art. 72.-..... En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

m). Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.

Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.

Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley:

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley.

Art. 279.-.....Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República.

Art. 313.-El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Art. 315.-El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.

Art. 317.-Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.

Art. 321.-El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.

Art. 323.-..... Se prohíbe toda forma de confiscación.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley

y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles.

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.....

Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia.³⁷

7.2 CÓDIGO CIVIL

El Código Civil Ecuatoriano recogiendo las disposiciones de la madre de las leyes, la Constitución Política, dentro de sus disposiciones hace relación a los recursos naturales no renovables en los siguientes artículos:

Art. 162.- El usufructo en las minas denunciadas por uno de los cónyuges o por ambos se agregará al haber social.

Art. 588.- Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo. Los

³⁷ Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 de 20 de Octubre de 2008.

utensilios de labranza o minería.....

Art. 589.- Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los arboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a favor de otra persona que el dueño.

Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina, y a las piedras de una cantera.

Art. 607.- El Estado es dueño de todas las minas y yacimientos que determinan las leyes especiales, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares, sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieren situados.

Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, para buscar las minas a que se refiere el precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas y la de disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescriben las leyes de minería

Art. 702.- Se efectuara la tradición del dominio de bienes raíces por la inscripción del título en el libro correspondiente del Registrador de la Propiedad.

De la misma manera se efectuara la tradición de los derechos de usufructo o de uso, de habitación o de servidumbre constituidos en bienes raíces, y del derecho de hipoteca.

Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en las leyes especiales respectivas.

Art. 798.- Si la cosa dada en usufructo comprende minas y canteras en actual labores, podrá el usufructuario aprovecharse de ellas y no será responsable de la disminución de productos que en consecuencia sobrevenga, con tal que haya observado las disposiciones de la ordenanza respectiva.

Art. 2008.- La estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto se subentiende en las que se forman para el arrendamiento de un inmueble, o para el laboreo de minas, y en las anónimas.

Art. 2325.- La hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras no se extiende a los frutos percibidos, ni a las sustancias minerales una vez separadas del suelo.³⁸

³⁸ Código Civil, Suplemento de Registro Oficial No. 46 de 24 de Junio de 2005.

7.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Ley de Gestión Ambiental fue expedida y publicada en el Registro Oficial No 245 de 30 de julio de 1999. En lo que tiene que ver con las actividades mineras, estimo que todas las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental deben observarse, pero para el presente trabajo investigativo es necesario la transcripción de los siguientes artículos:

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.

En el sistema participara la sociedad civil de conformidad con esta Ley.

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédese acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución de la República.³⁹

³⁹ Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial No 245 de 30 de julio de 1999.

7.4 LEY DE DESARROLLO AGRARIO

Desde la publicación de la Ley de Minería en mayo de 1991, existían constantes conflictos entre los peticionarios de concesiones mineras de explotación de materiales de construcción y los propietarios de los terrenos en donde se ubican tales yacimientos, hasta que en 1997 se expidió la nueva Ley de Desarrollo Agrario, que contempla y aclara esta situación, incluso tuvo que reglamentarse tales disposiciones. Consecuentemente, se estima necesario transcribir los artículos de la Ley y del Reglamento que hacen referencia directa a las actividades mineras:

Ley.- Art. 34.- Expropiaciones y Concesiones para otros fines.- Para expropiar tierras que estuvieren dedicadas a la producción agraria para destinarlas a otros fines distintos a los de su vocación natural se requerirá informe previo favorable del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se exceptúan las expropiaciones para obras públicas, que se rigen por normas especiales.

Las concesiones mineras de materiales de empleo directo en la industria de la construcción, tales como arcillas superficiales, arenas y rocas, solo se podrán hacer con autorización expresa del propietario otorgada mediante escritura pública.⁴⁰

7.5 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO

Las reformas que se introdujeron al Reglamento de la Ley de Desarrollo Agrario, fueron específicamente para determinar con claridad las obligaciones de los peticionarios de concesiones mineras de materiales de construcción, así como de los Directores Regionales de Minería, cuyas normas nos permitimos transcribir:

⁴⁰ Ley de Desarrollo Agrario, Registro Oficial No. 1997.

Art. 58-A.- Las concesiones mineras de explotación de materiales de empleo directo en la industria de la construcción, tales como arcillas superficiales, arenas y rocas, se otorgaran por parte de la Dirección Regional de Minería competente (actualmente por el Ministerio Sectorial y regulado por el Municipio respectivo), previa observancia del procedimiento para el otorgamiento de esta clase de concesiones y una vez que el solicitante presente, la autorización expresa del propietario o de los propietarios de los terrenos comprendidos dentro del área de la concesión.

Tal autorización extendida mediante escritura pública, será entregada por el solicitante, junto con la petición de concesión.

La falta de entrega de dicha autorización, constituirá causa suficiente para la declaratoria de archivo del expediente del área y la eliminación de los registros de la unidad de Catastro Minero.

Si el solicitante es propietario único del terreno en el que se ubica el área materia de la solicitud de concesión, bastará con la presentación de la escritura pública que lo acredite como tal.

Art. 58-B.- En caso de ser varios los propietarios de los terrenos comprendidos dentro del área de la concesión y alguno o algunos de ellos no hubiere conferido la autorización a la que se refiere el Art. 35 de la Ley 07 Reformatoria a la Ley de Desarrollo Agrario, la Dirección Regional de Minería (hoy Ministerio Sectorial), no otorgara el título de concesión de explotación minera mientras no se excluyan de la solicitud los terrenos en cuestión, estos podrán ser concedidos al mismo o a otro solicitante, solo previo el cumplimiento del requisito de autorización correspondiente.

Art. 58-C.- Para el otorgamiento de concesiones mineras dentro de las tierras que constituyen el Patrimonio Forestal o el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, se requerirá la autorización del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre – INEFAN (actualmente del Ministerio del Ambiente), de acuerdo a lo establecido en el Art. 87 de la Ley de Minería.⁴¹

7.6 REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA

Este Reglamento fue publicado mediante Decreto Ejecutivo No 3934, publicado en el Registro Oficial No 999 de 30 de julio de 1996, considerando la necesidad de dar cumplimiento a las normas de seguridad e higiene minera-industrial, aplicables a la actividad minera nacional, a fin de preservar tanto la salud y vida de los trabajadores mineros, como de los trabajos e

⁴¹ Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario.

infraestructura del sector. La materia de seguridad minera es muy compleja y necesita ser tratada por verdaderos especialistas, pero dentro del ámbito del presente trabajo, es necesario hacer la transcripción de los siguientes artículos:

Art. 1.- Disposiciones aplicables.- Las disposiciones de este Reglamento son aplicables en el ámbito señalado en el artículo 1 de la Ley de Minería y particularmente en las fase de exploración, explotación, beneficio, fundición y refinación.

Art. 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas para la aplicación de la Ley de Minería, a fin de proteger la vida y salud del recurso humano minero. Para el efecto, deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y capacitación; y, se aprovecharan experiencias practicas y técnicas actualizadas que coadyuven al mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos mineros y a la conservación de la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando además, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. De igual modo, se propenderá a establecer campamentos que ofrezcan condiciones adecuadas de higiene y comodidad, para el personal que desarrolla actividades mineras.

Art. 8.- Deducciones.- Los titulares de derechos mineros con sujeción a las disposiciones que se contienen en el artículo 154 de la Ley de Minería, letras d) y e), tendrán derecho a la aplicación de las deducciones por las primas de seguro que cubran riesgos personales de los trabajadores, riesgos sobre los bienes utilizados con la actividad minera y otras responsabilidades o riesgos que a causa de dicha actividad se pudieran producir, así como también las contribuciones a favor de los trabajadores, para finalidades de asistencia médica, sanitaria, capacitación y entrenamiento profesional, respecto de la seguridad e higiene minera industrial

Art. 23.- Accidentes de trabajo.- Los titulares de derechos mineros están obligados a enviar a la Dirección Nacional de Minería (actualmente Agencia de Control y Regulación Minera), informes técnicos por escrito, respecto de cualquier accidente de trabajo que sufra su personal, dentro de veinticuatro horas a partir del momento que haya ocurrido el suceso.....

Art. 27.- Comités de Seguridad e Higiene de Trabajo.- En las concesiones o plantas en las cuales laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, en la forma y con las funciones que se establecen en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.⁴²

⁴² Reglamento de Seguridad Minera, Registro Oficial No 999 de 30 de julio de 1996.

7.7 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Toda vez que la Ley de Minería, objeto del presente trabajo, en su artículo 15 declara de utilidad pública la actividad minera en todas sus fines y establece las obligaciones de los titulares mineros respecto de la preservación del ambiente, se dictó el citado Reglamento que es de aplicación directa en la actividad minera, por lo que se vuelve indispensable para el presente trabajo investigativo, la transcripción de los siguientes artículos:

Art. 1.- **Ámbito de aplicación.**- El presente reglamento, las normas técnicas ambientales incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en todo el territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de prospección, exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas; así como también en las actividades de cierres parciales y totales de labores.

Art. 2.- **Objeto.**- El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional.

Art. 33.- **Garantía de cumplimiento del plan de manejo ambiental y garantía de responsabilidad civil.**- Para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas en los planes de manejo ambiental, el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, exigirá a los titulares mineros que presenten una garantía de fiel cumplimiento, mediante una póliza de seguros o garantía bancaria, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Ambiente, la que deberá mantenerse vigente y actualizarse hasta el completo cierre de operaciones del área y por un año posterior a la finalización del período de vigencia de las concesiones.

Esta garantía corresponderá al monto del programa y presupuesto anual previamente aprobado por el Ministerio del Ambiente. Así mismo la garantía deberá tener cobertura de la responsabilidad civil que se podría desprender por daños a terceros.

Las entidades del Estado o empresas cuyo capital suscrito pertenezca mayoritariamente a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, que obtengan la autorización del Ministerio Sectorial para aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas, no requerirán la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental ni la presentación de

seguros de responsabilidad civil, para obtener la licencia ambiental minera. Sin embargo, responderán administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del plan de manejo ambiental del proyecto o actividad minera licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros.

Art. 11. - Estudios de impacto ambiental para actividades mineras.- Previo al inicio de cualquier actividad minera se presentará al Ministerio del Ambiente el correspondiente estudio de impacto ambiental de acuerdo con las disposiciones de este reglamento y demás normativa ambiental vigente.

Art. 44.- Informes, programas y presupuestos ambientales anuales.- Los titulares de derechos mineros deberán presentar al Ministerio del Ambiente, una vez al año, para su conocimiento, control y seguimiento ambiental, un informe del avance de cumplimiento del plan de manejo ambiental en el cual se identifiquen entre otros aspectos la medida ambiental, el indicador, medio de verificación, responsable, porcentaje de cumplimiento y el presupuesto. La periodicidad de la presentación del informe constará en la licencia ambiental correspondiente.

Art. 46.- Auditoría ambiental de cumplimiento.- Los titulares mineros que realicen actividades de exploración, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, transporte y comercialización, y los de libre aprovechamiento, presentarán al Ministerio del Ambiente, al primer año a partir de la emisión de la licencia ambiental y posteriormente cada dos años hasta el cierre y abandono de la actividad minera objeto de licenciamiento, una auditoría ambiental de cumplimiento.

Disposiciones Generales.- PRIMERA.- Calificación y registro de consultores ambientales mineros.- Los prestadores de servicios ambientales en el ámbito minero que realicen estudios de impacto ambiental y/o auditorías ambientales deberán estar previamente calificados y registrados en el Ministerio del Ambiente.⁴³

7.8 LEY DE CÁMARAS DE MINERÍA

Este cuerpo legal se refiere a los beneficios de las personas naturales o jurídicas que se encuentran afiliadas a las respectivas cámaras de minería y a la forma de conformar las mismas. Para el presente trabajo, es indispensable transcribir el siguiente artículo que no es generalmente observado por quienes se van a dedicar a la actividad minera.

⁴³ Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, Suplemento de Registro Oficial No. 67 de 16 de Noviembre de 2009.

Art. 3.- Para poder realizar actividades de carácter minero en el Ecuador, las personas naturales y jurídicas deberán previamente afiliarse a la Cámara de Minería de su respectiva jurisdicción. Exceptuase de esta afiliación a los pequeños mineros y mineros artesanales que la Ley así los califica, salvo si ellos los solicitaren.⁴⁴

7.9 LEY DE AGUAS Y REGLAMENTO

Este cuerpo legal no se refiere mucho a las actividades mineras, pero los artículos que se transcriben a continuación siempre deben ser considerados los concesionarios mineros, especialmente en la fase de Explotación.

Ley: Art. 5.- Pro derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley.

Las aguas destinadas a un inmueble o industria, podrán ser usadas por el mero tenedor de estas, en las mismas condiciones y con las limitaciones que tuvo el titular del derecho de aprovechamiento.

Reglamento: Art. 117.- Las personas naturales o jurídicas, previa a la explotación de yacimientos minerales, dentro de cuyo proceso utilicen aguas marítimas, superficiales o subterráneas, deberán obtener la concesión del derecho de aprovechamiento de las aguas y para tal objeto presentarán al Consejo de Recursos Hídricos (actualmente la Secretaría Nacional del Agua) el estudio justificativo de tal uso debidamente aprobado por la Dirección General de Geología y Minas (Dirección Nacional de Minería, actualmente Agencia de Regulación y Control Minero). Dicho estudio será preparado de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas de las dos instituciones nombradas.⁴⁵

⁴⁴ Ley de Cámaras de Minería.

⁴⁵ Ley de Aguas y Reglamento General a la Ley de Aguas.

7.10 LEY DE CAMINOS

Este cuerpo legal, básicamente se refiere a la potestad que tienen el Estado, a través del Ministerio de Obras Publicas (hoy Ministerio de Transporte y Obras Publicas) para aprovechar libremente los materiales de construcción que sean necesarios en la construcción de caminos, y así tenemos:

Art. 5.- El Estado y las entidades encargadas de un camino podrán explotar libremente las canteras de piedra, arena y otros materiales necesarios para la construcción, mejoramiento, rectificación o mantenimiento de los caminos públicos.
Cuando las canteras fueren de propiedad particular, se pagaran las indemnizaciones por los daños que se causaren y no el valor de los materiales.
Si las canteras se hallan en explotación se podrá celebrar contratos con los dueños para el aprovechamiento de los materiales, por precios equitativos.
Los dueños de los predios por los cuales se tuviere que atravesar para el transporte de los materiales, soportaran las servidumbres de tránsito y las indemnizaciones se pagaran con fondos de la obra, como si se tratara de ocupación temporal.⁴⁶

7.11 OTRAS LEYES Y CÓDIGOS

Adicionalmente a los cuerpos legales invocados anteriormente, la Ley de Minería, por contener disposiciones que involucran a varios sectores de la sociedad, tiene relación con otros códigos y leyes, cuyas normas no se considera necesario transcribirlas, pero que si de una manera general las voy a comentar por que en un determinado momento se las tendrá que aplicar para que la minería tome el rumbo correcto para su desarrollo, y así tenemos:

⁴⁶ Ley de Caminos.

Código de Procedimiento Civil.- Este código se lo aplica para la calificación de las demandas de amparo administrativo, así como para hacer las citaciones respectivas.

Ley de Compañías.- Se aplica sus disposiciones en lo que tiene que ver sobre la capacidad de las personas jurídicas para poder obtener derechos mineros y realizar dichas actividades.

Código Tributario.- Se aplican sus disposiciones en lo referente a las explotaciones ilícitas y comercio clandestino de sustancias minerales.

Código Penal.- En este código existe un capítulo completo relacionado con las infracciones que se cometen en la alteración y contaminación del medio ambiente, y obviamente tiene disposiciones referentes a las actividades mineras.

Código de Procedimiento Penal.- Como norma supletoria en materia minera, sus disposiciones son aplicadas en muchos de los casos en los procesos de explotación ilícita y comercio clandestino de sustancias minerales.

Ley de Régimen Municipal.- Los diferentes municipios del Ecuador, en ejercicio de este cuerpo legal, dictan una serie de ordenanzas para controlar las actividades mineras dentro de su jurisdicción, principalmente en lo que tiene que ver con los materiales de empleo directo en la industria de la construcción y en muchos de los casos estas contravienen a la Ley de Minería.

Ley Notarial y Ley de Registro.- Las disposiciones de estos cuerpos legales tienen que ver con la actividad minera por cuanto se las aplica para las protocolizaciones e inscripciones de los títulos mineros y más actos y contratos establecidos en la Ley de Minería.

Ley de Federación de Abogados.- Específicamente se aplica el artículo 50, para exigir a los peticionarios y titulares mineros, la firma de un abogado en todas las solicitudes y escritos relacionados con la actividad minera.

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.- Se aplican sus disposiciones en los procesos en los cuales las autoridades de la administración minera son demandadas por personas naturales o jurídicas que se creen afectadas por disposiciones administrativas que supuestamente afectan sus derechos mineros.

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.- Este Estatuto es de mucha importancia en lo que tiene que ver con el derecho minero, ya que su aplicación es constante cuando las autoridades mineras emiten los actos administrativos, y estos se perfeccionan por la forma y por el fondo, como por ejemplo determinar su correcta notificación y la fecha en que quedan firmes. Así mismo se aplica el aludido Estatuto en los recursos de Reposición, Apelación o Jerárquico y Extraordinario de Revisión, encaminados a buscar la extinción de los actos administrativos que lesionen derechos mineros, tanto de peticionarios como de concesionarios.

En los últimos tiempos también se está aplicando la Ley de Control Constitucional, en aquellos asuntos que los peticionarios o titulares mineros se creen perjudicados en sus derechos por las resoluciones adoptadas por la administración minera.

CONCLUSIONES

- A partir del estudio y análisis del presente trabajo investigativo, se puede arrogar como una conclusión que existe gran variedad de figuras jurídicas de difícil entendimiento y aplicación, mismas que no se han difundido de una manera adecuada y por la no utilización de estas en la actividad minera se vuelve complicado el esperar que se generen resultados positivos sobre todo cuando lo mas importante en este momento es obtener celeridad en la aplicación de la nueva normativa jurídico-minero.
- Se puede apreciar que con las actuales regulaciones mineras, la inseguridad jurídica que se puede llegar a crear es grande, esto debido a la discrecionalidad de los funcionarios públicos al momento de realizar todos los trámites administrativos propios de su función, lo que sin lugar a dudas dejará desprotegidos a los peticionarios.
- Con todas las disposiciones ambientales que han sido incorporadas a la nueva Ley de Minería, se evidencia la falta de estructura en la administración pública ambiental, por lo que resulta inequívoco el hecho, que muchas de estas regulaciones no se van a poder cumplir ni regular a cabalidad; además que no existe el número suficiente de funcionarios que puedan realizar las inspecciones debidas para mantener el control ambiental que tanto prepondera la actual Ley.
- Dentro de la nueva Ley de Minería se menciona una serie de Reglamentos e Instructivos encaminados a la aplicación y regulación de ciertas figuras jurídicas, pero se debe tomar en cuenta que la esta Ley fue expedida el 29 de Enero de 2009 y hasta la presente fecha no se han expedido estos reglamentos por parte del ejecutivo, lo que

genera un gran vacío legal al momento de ejercer los derechos que por ley se le son reconocidos a los concesionarios y los que pretenden adquirir los peticionarios.

- Con la promulgación de la actual Ley de Minería, las concesiones metálicas se las otorga vía subasta o remate público, acorde a lo prescrito en el Plan Nacional de Desarrollo Minero, lo que deja entrever que se puede crear una confabulación para el otorgamiento de estas.
- Después de analizar la nueva Ley de Minería, se puede asegurar que el aumento de burocracia es elevado, lo que sumado al desconocimiento de esta materia tan compleja, enreda los trámites administrativos que se realice en las dependencias públicas y una vez más dejará desprotegidos a los concesionarios mineros, sobre todo teniendo en cuenta que la explotación ilegal en el Ecuador es abundante.
- La delegación a los Municipios en lo que se refiere al otorgamiento de concesiones para materiales de construcción, puede llegar a acarrear serios problemas de ineficiencia, esto debido a que este ente público, no tiene departamentos especializados en materia minera además que no cuenta con experiencia en esta actividad. Simultáneamente hay que tener presente que la minería conlleva un grado de inseguridad muy alto en cuanto a las afecciones que puede causar esta, por lo que no se puede correr el riesgo de experimentar al momento de regular esta actividad.

Finalmente se puede concluir que la expedición de una nueva Ley de Minería, no era la solución que se buscaba en esta materia, ya que lo único que ha traído consigo esta Ley es inseguridad y vacíos jurídicos enormes, ha causado pérdidas económicas incalculables y sobre

todo lo más grave que se deriva de esto, es el desempleo que ha sufrido la población, porque no se puede olvidar que la minería es el sustento de muchas familias ecuatorianas.

RECOMENDACIONES

Producto del trabajo investigativo realizado, se considera necesario que tanto el sector público como el privado, para un mejor funcionamiento del sector minero, deben ponerse de acuerdo en los objetivos primordiales que vayan en pos del desarrollo de la minería, y que para el efecto se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Incluir reformas a la Ley de Minería en cuanto se refiere a las figuras jurídicas que se contemplaban en la Ley No. 126, esto debido a que existe una familiarización en el correcto uso de estas, además que la experiencia ha demostrado que funcionaban correctamente. Simultáneamente realizar una difusión de esta Ley en el sector minero, para de esta manera evitar violaciones a la misma.
- Reformar la Ley para impedir los actos de discrecionalidad a los que está sujeto los peticionarios y concesionarios. De igual modo realizar una mayor delegación al sector privado, esto con el fin de poder aprovechar los minerales, ya que el Estado no está en la capacidad de invertir tanto dinero en una actividad como esta que conlleva un riesgo muy alto.
- La creación de entes mixtos de control ambiental, se vuelve indispensable, sobre todo

si se toma en cuenta que la infraestructura administrativa ambiental es insuficiente, además con la creación de estas entidades se puede llevar un control estricto y porque no de una manera permanente, día a día en áreas donde se desarrollen actividades mineras.

- Mayor celeridad en la expedición de los Reglamentos e Instructivos por parte del Ejecutivo, ya que se está incrementando la explotación ilegal, lo que en definitiva acarrea pérdidas económicas tanto para el concesionario como para el Estado, así como graves problemas de afección ambiental, debido a que este delito se lo comete sin tomar los debidos procedimientos para la extracción de los minerales.
- Reforma de la Ley en el modo mediante el cual se debe adquirir concesiones metálicas, esto debido a que no se puede esperar a que todos los años la SEMPLADES emita el Plan Nacional de Desarrollo Minero, ya que hasta el momento ha demostrado un grado de ineficiencia muy alto. Igualmente se debe recalcar que la subasta y remate nunca se han caracterizado por ser transparentes, lo que hace creer que se podría dar contubernios.
- Se debe capacitar a los municipios e incrementar departamentos especializados para que estos puedan regular eficientemente la explotación de materiales de construcción. De la misma manera se debe tener celeridad en la expedición de las ordenanzas para la regulación de esta actividad, para de esta manera no dejar desprotegidos a los concesionarios mineros.

Por último se recomienda con urgencia la creación del Banco Minero, para de este modo brindar el apoyo que tanto necesita el sector minero, sobre todo la pequeña minería y la minería artesanal. Esta creación se la debe realizar tomando como premisa el alto costo de inversión que implica desarrollar la actividad minera, no solo en el Ecuador sino a nivel mundial.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	4
ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE LA MINERÍA	4
1.1 LA MINERÍA Y EL HOMBRE.....	4
1.2 BREVE HISTORIA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR.....	7
1.2 MINERÍA INCAICA	9
1.3 MINERÍA EN LA COLONIA	10
1.4 MINERÍA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA	10
CAPÍTULO II.....	15
DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES.....	15
2.1 EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN.....	15
2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN	16
2.2.1 Jurisdicción y competencia.....	17
2.3 NORMAS SUPLETORIAS	18
2.4 DEL DOMINIO DEL ESTADO.....	19
2.5 DERECHOS MINEROS.....	20
2.6 DE LA ACTIVIDAD MINERA NACIONAL	21
2.7 FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA	22
2.7.1 Prospección.....	23
2.7.2 Exploración.....	23
2.7.3 Explotación	23
2.7.4 Beneficio	23
2.7.5 Fundición	24
2.7.6 Comercialización	24
2.7.7 Cierre de Minas.....	24
2.8 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA MINERA	25
CAPÍTULO III	30
DE LA CONCESIÓN MINERA.....	30
3.1 DEFINICIÓN	30
3.2 DE LOS DERECHOS DE TITULARES MINEROS.....	35
3.3 DEL AMPARO ADMINISTRATIVO Y ACTOS CAUTELARES	36
3.4 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS.....	37

3.5 OBLIGACIONES LABORALES.....	37
3.6 OTRAS OBLIGACIONES	39
3.7 SERVIDUMBRES	41
3.8 CLASES DE SERVIDUMBRES.....	43
3.9 DE LA INTERNACIÓN.....	44
CAPÍTULO IV	46
LOS CONTRATOS MINEROS.....	46
4.1 DE LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS.....	47
4.2 DE LA PROMESA IRREVOCABLE	47
4.2.1 Legalización y Registro	48
4.3 CONTRATOS OPCIONALES	48
4.4 DEL ARRENDAMIENTO	49
4.5 DE LA HABILITACIÓN MINERA.....	49
4.6 DE LA HIPOTECA	50
4.7 DE LA UNIÓN TRANSITORIA.....	51
4.8 DE LA OPERACIÓN	51
4.9 DE LA CESIÓN EN GARANTÍA.....	52
4.10 MODALIDADES CONTRACTUALES	53
4.11 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53
4.12 CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA.....	54
4.13 DE LOS REGÍMENES ESPECIALES.....	55
4.14 DEL CONDOMINIO MINERO	55
4.15 DE LA MINERÍA DE SUSTENTO, PEQUEÑA MINERÍA, MINERÍA ARTESANAL Y MINERÍA A GRAN ESCALA.	56
4.15.1 Minería en pequeña escala.....	56
4.15.2 Minería artesanal y de sustento.....	56
4.15.3 Pequeña minería.....	57
4.15.4 Minería a gran escala	58
4.16 DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	58
CAPÍTULO V	60
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS Y ECONÓMICAS.....	60
5.1 DERECHOS DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO.....	60
5.2 PATENTES MINERAS.....	60
5.2.1 Patente de conservación.....	61
5.2.2 Patente de producción.....	63

5.3 REGALÍAS	63
5.4 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.....	64
5.5 EXPLOTACIÓN ILÍCITA	66
CAPÍTULO VI	68
DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER CONCESIONES MINERAS	68
6.1 PROCEDIMIENTO	68
6.2 DE LA INSCRIPCIÓN	77
6.3 REDUCCIÓN Y RENUNCIA DE HECTÁREAS MINERAS	78
6.4 EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS.....	81
6.5 CONSECUENCIAS JURÍDICAS	84
6.6 DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	84
6.7 DE LA GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.....	86
6.7.1 Procesos de información.....	87
6.7.2 Procesos de participación y consulta	87
6.7.3 Denuncias de amenazas o daños sociales	88
CAPÍTULO VII.....	89
MARCO JURÍDICO CONEXO.....	89
7.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA	90
7.2 CÓDIGO CIVIL.....	92
7.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL	94
7.4 LEY DE DESARROLLO AGRARIO	95
7.5 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO	95
7.6 REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA	96
7.7 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.....	98
7.8 LEY DE CÁMARAS DE MINERÍA.....	99
7.9 LEY DE AGUAS Y REGLAMENTO.....	100
7.10 LEY DE CAMINOS	101
7.11 OTRAS LEYES Y CÓDIGOS.....	101
CONCLUSIONES	104
RECOMENDACIONES	106